

INE/CG132/2022

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/11/2017

Ciudad de México, 25 de febrero de dos mil veintidós.

VISTO para resolver el expediente **INE/P-COF-UTF/11/2017**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos nacionales.

ANTECEDENTES

I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en lo subsecuente el Consejo General), aprobó la Resolución **INE/CG808/2016**, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Revolucionario Institucional, correspondientes al ejercicio 2015, mediante la cual, entre otras cuestiones, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del partido, en relación con el punto Resolutivo **TRIGÉSIMO NOVENO**, Considerando **18.1.1**, inciso **m**), conclusión **48**. A continuación se transcribe la parte que interesa: (Fojas 1-15 del Expediente)

“(…)

18.1 RECURSO FEDERAL

18.1.1 COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

“(…)

m) Procedimiento oficioso

En el capítulo de Conclusiones Finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la conclusión 48 lo siguiente:

Conclusión 48

‘48. El partido presentó comprobantes de gastos expedidos en el ejercicio 2016 los cuales debieron haber sido expedidos en el ejercicio 2015; asimismo, no presentó las copias de las transferencias electrónicas con las cuales se realizaron pagos por un monto de \$5,000,000.00’

ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN DETECTADA EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

De la verificación a la documentación presentada por el partido, se localizaron facturas que no están registradas contablemente, las cuales fueron emitidas por el proveedor Servicios y Asesorías Traca S.A. de C. V. en el ejercicio 2016; así como, contratos de prestación de servicios que amparan operaciones realizadas con el partido en 2015, los casos en comento se detallan a continuación:

FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
A-518	12-02-15	Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V.	1. Servicio de consultoría y asesoría en materia contable,	\$350,000.00
A-519			administrativa, financiera y	910,000.00
A-520			logística a nivel nacional.	746,000.00
A-517				530,000.00
A-300	12-02-15	Servicios y Aplicaciones Integra S.A. de C.V.	1. Servicio de consultoría y asesoría en materia contable,	790,000.00
A-299			administrativa, financiera y	450,000.00
A-298			logística a nivel nacional	1,224,000.00
TOTAL			\$5,000,000.00	

Es importante mencionar que no se localizaron los cheques o transferencias electrónicas con las que se hayan pagado las facturas en comento, ni los registros contables de dichos pagos.

La normatividad es clara al señalar que los partidos políticos deben presentar informes de los ingresos y egresos, realizados para el desarrollo de sus actividades durante el ejercicio que sea objeto de revisión, apegándose a las Normas de Información Financiera para el registro de sus operaciones, específicamente por lo que se refiere al postulado básico ‘Devengación Contable’ contenido en la norma A-2.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-F/20382/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por su partido el mismo día.

Con escrito de respuesta núm. SFA/029/2016, recibido el 14 de septiembre de 2016, el PRI manifestó lo que a continuación se transcribe:

‘(...) se realizó el registro de dichas operaciones, mediante las pólizas que se indican en el cuadro, acompañadas de la documentación soporte, tales como, factura, comprobante digital xml, contrato y su anexo, y copia del estado de cuenta del mes de octubre de 2015, en el que se encuentran reflejadas las transferencias interbancarias que acreditan el pago a los proveedores (...)’

Del análisis a la documentación presentada, se determinó lo siguiente:

El partido presentó las pólizas, auxiliares contables y balanzas de comprobación con las correcciones a los registros contables, de tal forma que las facturas antes mencionadas están reportadas en el ejercicio correspondiente; por tal razón, la observación quedó atendida con respecto a dichos registros.

Por otra parte, la respuesta del partido quedó insatisfactoria, toda vez que las facturas fueron expedidas en el ejercicio 2016 debiendo ser expedidas en el ejercicio 2015; asimismo, no presentaron copia de las transferencias electrónicas de los pagos realizados.

Se le solicita presentar lo siguiente:

- *Las copias de los cheques correspondientes a los pagos que hubieran excedido el tope de 90 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que en el año 2015 equivalía a \$6,309.00 (90 x \$70.10), con la leyenda ‘para abono en cuenta del beneficiario’, o en su caso las copias de las transferencias bancarias anexas a su respectiva póliza.*
- *Las aclaraciones conducentes.*

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 17, 18, 33 numeral 1, incisos a) e i), 126, 127 numeral 1, 234, 255 y 296 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm.

INE/UTF/DA-F/21514/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido el mismo día.

Con escrito de respuesta núm. SFA/036/16, recibido el 13 de octubre de 2016, el PRI manifestó lo que a continuación se transcribe:

*'En el apartado 6 se incorporan el estado de cuenta correspondiente al número *****5500 de BANORTE en el que se pueden identificar las transferencias bancarias realizadas.*

Respecto a los comprobantes fiscales, es de señalar que la atribución de esta autoridad se constriñe en la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, dicha facultad, permite corroborar el origen de los recursos, que el monto, la aplicación y el destino de los mismos sea acorde con los fines de los partidos políticos, esto es, corrobora el adecuado manejo de los recursos.

Atendiendo a lo anterior, los partidos políticos tenemos la obligación de cumplir con el principio de transparencia, por lo que estamos obligados a presentar distintos tipos de informes, mediante los cuales damos a conocer el manejo de los recursos, asimismo, cumplimos con la obligación de permitir la práctica de auditorías y verificaciones, así como entregar la documentación que nos requieran respecto a nuestros ingresos y egresos.

Derivado de lo anterior, se concluye que lo que se busca a través del modelo de fiscalización es tener certeza y transparencia sobre el manejo de los recursos, esto es, esclarecer de dónde provienen los recursos que los partidos políticos poseen; cuál es el monto total de recursos que percibió durante el ejercicio en revisión; cuál es el monto total de recursos que erogó durante el mismo periodo, de esos recursos erogados, en qué los aplicó, es decir, qué actividades realizó, qué bienes muebles o inmuebles adquirió, etc., y a quién le realizó los pagos.

La anterior reflexión sirve para aclarar a esta autoridad que, los gastos que amparan las facturas fueron registrados y realizados como lo establece el Reglamento de Fiscalización, esto es en el momento en el que se devengaron efectivamente los servicios y en atención a las fechas de cumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como se desprende de la parte conducente del comprobante observado; esa autoridad puede constatar la fecha efectiva de pago de las obligaciones contractuales en el estado de cuenta y el contrato.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que contrario a lo expresado por la autoridad el recibo sí reúne los requisitos fiscales establecidos por el artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, toda vez que contiene lo siguiente:

- *Fue emitidos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.*
- *Contienen la clave del registro federal de contribuyentes de quien lo expidió y el régimen fiscal en que tributa.*
- *El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración, así como el sello digital del contribuyente que lo expide esto es del prestador del servicio.*
- *El lugar y fecha de expedición.*
- *La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expide, en el caso del Partido.*
- *La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.*
- *El valor unitario consignado en número.*
- *El importe total consignado en número o letra, señalando que se pagó en una sola exhibición, indicando el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos, así como indicando el medio de pago utilizado.*

En el mismo sentido, contrario a lo afirmado por la autoridad, este partido considera que para efectos del objetivo perseguido por la autoridad fiscalizadora, la fecha de emisión del comprobante fiscal no debe tener tanto peso como para considerar que se vulneran los bienes jurídicos protegidos por la norma, toda vez que se debe considerar que existe evidencia fehaciente del método de pago y de las cuentas a las que fue a parar el recurso.

Resulta un hecho notorio que los comprobantes fiscales corresponden al 2016, sin embargo, eso no quiere decir que no cumplan con los requisitos fiscales y menos aún, que no podamos comprobar las erogaciones observadas, con los mismos. En este sentido, el código fiscal no precisa el momento exacto en el que el contribuyente adquiere esta obligación y tampoco la fecha límite para hacerlo.

No pasa desapercibido para este partido que el reglamento de dicho código, en su artículo 39 establece que los contribuyentes deberán remitir al Servicio de Administración Tributaria o al proveedor de certificación, según sea el caso, el comprobante fiscal digital por Internet, a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a que haya tenido lugar la operación, acto o actividad de la que derivó la obligación de expedirlo.

Es decir, después de realizar el pago, se cuenta con veinticuatro horas para hacer llegar la información al Servicio de Administración Tributaria (o al proveedor de facturación) para que:

- Valide que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación
- Le asigne el folio UUID
- Le incorpore el sello digital del SAT

A su vez, el proveedor de facturación (Proveedor Autorizado de Certificación), cuenta con un plazo de setenta y dos horas para poder validar que la información contenida en el comprobante cumpla con lo establecido en la ley. Lo que nos ayuda a comprender que dicha disposición se refiere al plazo con que cuentan los prestadores de bienes y servicios, para remitir al Servicio de Administración Tributaria o al Proveedor de Certificación de CFDI, el comprobante fiscal digital por internet para que le asignen el folio y le incorporen el sello digital del SAT, pero no se pronuncia respecto del plazo que tienen los proveedores de bienes o servicios para poner a disposición de sus trabajadores o clientes el CFDI.

En conclusión, debemos dejar en claro que, si bien todos los contribuyentes deben emitir comprobantes fiscales por las operaciones que realicen (y no hacerlo sí amerita una sanción o multa) ni el código, ni las leyes que regulan los impuestos como son el ISR, el IVA o el IEPS precisan el momento en que deben expedirlo.

En dichos ordenamientos tampoco se establece que el plazo pueda ser fijado por la autoridad fiscal; si la autoridad impone una multa por haber emitido el comprobante una vez transcurridas 24 horas previstas en el artículo 39 del Reglamento CFF, es evidente que el contribuyente podrá impugnarla, pues dicha disposición resulta ilegal, ya que, violenta del principio de legalidad al estar basándose en un reglamento para sancionar, toda vez que sigue sin establecerse con precisión cuál es el plazo para que los proveedores de bienes o servicios pongan a disposición de sus clientes el CFDI.

Por último y de acuerdo a la normatividad en materia fiscal y electoral en la cual se sustenta la conducta en comenté, es posible determinar que no existe precepto o argumento jurídico que establezca de forma directa o indirecta la obligación de emitir los comprobantes fiscales durante la anualidad en la cual se hubiese llevado a cabo la prestación del servicio; es decir, la emisión de cualquier tipo de comprobante de naturaleza fiscal no se encuentra supeditado a una norma que exija que la temporalidad con la cual se cuenta para realizar la expedición de los referidos comprobantes es un año calendario.

Cabe señalar que de acuerdo con el principio general del derecho que versa: 'Lo que no está prohibido está permitido' y tal como se ha señalado en el párrafo

que antecede al no existir prohibición alguna de llevar a cabo la emisión de algún comprobante fiscal no se estaría vulnerando la legislación.

Aunado a lo anterior, esta autoridad no debe perder de vista que, en todo caso, no resulta la autoridad facultada para sancionar dicha situación, toda vez que carece de competencia para pronunciarse al respecto.'

Del análisis a las aclaraciones y documentación presentada, se determinó lo siguiente:

La respuesta del partido quedó insatisfactoria, toda vez que una de las atribuciones de la Unidad Técnica de Fiscalización es la de corroborar el origen de los recursos, su aplicación y el destino de los mismos, esto implica precisamente la revisión de la documentación con la que se comprueba la aplicación de esos recursos, por consiguiente al presentar comprobantes de gastos expedidos en el ejercicio 2016 los cuales debieron haber sido expedidos en el ejercicio 2015 el partido incumplió con disposiciones fiscales particularmente con el artículo 39 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en el cual se establece que: 'Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción IV del Código, los contribuyentes deberán remitir al Servicio de Administración Tributaria o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet autorizados por dicho órgano desconcentrado, según sea el caso, el comprobante fiscal digital por Internet, a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a que haya tenido lugar la operación, acto o actividad de la que derivó la obligación de expedirlo.'

*Por otro lado, el partido no proporcionó las copias de las transferencias electrónicas de los pagos realizados únicamente proporcionó copia del estado de cuenta bancario de la cuenta número *****5500 del Banco Mercantil del Norte, S.A. en la que no es posible identificar el Registro Federal de Contribuyentes de los proveedores a los cuales se les realizaron dichos pagos; en razón de lo anterior la observación no quedó atendida por un monto de \$5'000,000.00.*

En consecuencia, se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de determinar lo que en derecho corresponda, por lo que hace a la contratación y pago de las operaciones realizadas por el partido con las personas morales materia de la observación.

(...)

TRIGÉSIMO NOVENO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en los considerandos respectivos."

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El diez de enero de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle número de expediente, notificar al Secretario del Consejo General y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del procedimiento, y publicar el Acuerdo en los estrados de este Instituto. (Foja 16 del expediente)

III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.

- a) El diez de enero de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 17-18 del expediente)
- b) El trece de enero de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los estrados del Instituto, el citado acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 25 del expediente)

IV. Notificación del inicio del procedimiento oficioso al Partido Revolucionario Institucional. El diez de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/081/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 19-20 del expediente).

V. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diez de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/047/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 21-22 del expediente)

VI. Aviso de inicio del procedimiento oficioso a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización. El diez de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/046/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Lic. Enrique Andrade González, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 23-24 del expediente)

VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).

- a) El dieciséis de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/045/2017, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Auditoría (ambas de la Unidad Técnica de Fiscalización), proporcionara, respecto de la conclusión 48, la información o documentación obtenida en el marco de la revisión de los informes correspondientes. (Fojas 26-27 del expediente)
- b) El veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA/0041/17, la Dirección de Auditoría, proporcionó la información solicitada consistente en contratos, facturas y estado de cuenta. (Fojas 28-122 del expediente)
- c) El veinte de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/379/2019, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Auditoría, proporcionara toda la información relacionada con muestras, entregables y/o evidencias de las operaciones sujetas a investigación. (Fojas 631-632 del expediente)
- d) El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/0781/19, la Dirección de Auditoría, informó que por tratarse de la contratación de servicios intangibles no cuenta con las evidencias; únicamente cuenta con contratos, facturas, solicitudes de pago y estado de cuenta. (Fojas 637-639 del expediente)
- e) El seis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/786/2019, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Auditoría, proporcionara toda la información relacionada el listado de sujetos obligados que hayan registrado operaciones con las personas morales Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V. y Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V. (Fojas 778-779 del expediente)
- f) El diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en alcance a la solicitud anterior, se dirigió el oficio INE/UTF/DRN/805/2019 mediante el cual se precisó que la información solicitada se circunscribía al ejercicio ordinario de los ejercicios 2016 a 2019. (Fojas 789-790 del expediente)

- g) El cinco de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/1039/19, la Dirección de Auditoría informó que, de una búsqueda exhaustiva en el Sistema Integral de Fiscalización, no se localizaron registros de operaciones realizadas con los proveedores en comento. (Foja 829 del expediente)

VIII. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal de la persona moral Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V.

- a) Mediante acuerdo de fecha uno de febrero de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México realizara lo conducente a efecto de requerir al Representante y/o Apoderado Legal de Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V., para que confirmara el haber expedido cuatro facturas a nombre del Partido Revolucionario Institucional y aclarara las diferencias existentes entre la anualidad de la prestación del servicio y la de la expedición de los comprobantes. (Fojas 123-124 del expediente)
- b) El catorce de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE-JLE-MEX/VS/J/0125/2017, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México remitió el acta circunstancia número CIRC06/JD17/MEX/03-02-17, respecto de la imposibilidad de realizar la notificación correspondiente, dado que la empresa no se ubica en el domicilio señalado. (Fojas 127-135 del expediente)
- c) El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, mediante acuerdo de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo en el estado de Puebla, realizara lo conducente a efecto de notificar al Representante y/o Apoderado Legal de Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V., el requerimiento formulado en el inciso a). (Fojas 216-217 del expediente)
- d) El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/VE/EF/177/2017, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla remitió el acuse del oficio número INE/PUE/JDE03/VE/1327/2017, así como las constancias de la diligencia de las que se desprende que el dueño del inmueble no se encontraba y la inquilina que lo ocupa y que atendió al notificador le señaló que no tiene conocimiento de esa empresa. (Fojas 250-258 del expediente)

- e) Mediante acuerdo de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora realizara lo conducente a efecto de requerir al Representante y/o Apoderado Legal de Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V., para que confirmara el haber expedido cuatro facturas a nombre del Partido Revolucionario Institucional y aclarara las diferencias existentes entre la anualidad de la prestación del servicio y la de la expedición de los comprobantes. (Fojas 879-880 del expediente)
- f) Mediante oficio INE-JLE-SON/0500/2020, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Sonora remitió el acta circunstancia de fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, respecto de la imposibilidad de realizar la notificación correspondiente, toda vez que la persona que se requirió es un niño de un año de edad. (Fojas 885-889 del expediente)

IX. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal de la persona moral Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V.

- a) El uno de febrero de dos mil diecisiete, mediante acuerdo de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro realizara lo conducente a efecto de solicitar al Representante y/o Apoderado Legal de Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V., para que confirmara el haber expedido tres facturas a nombre del Partido Revolucionario Institucional y aclarara las diferencias existentes entre la anualidad de la prestación del servicio y la de la expedición de los comprobantes. (Fojas 125-126 del expediente)
- b) El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/VS/066/2017, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Querétaro remitió el acta circunstancia número INE/CIRC007/JLE/QRO/09-02-17, así como las constancias de notificación respectivas. (Fojas 136-151 del expediente)
- c) El veinte de febrero de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica el oficio INE/VS/073/2017, signado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, mediante el cual remitió la respuesta presentada por la representante legal de Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V., mediante el cual desconoció la competencia de la Vocal Ejecutiva Local para requerirle información. (Fojas 152-186 del expediente)

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/11/2017

- d) El diez de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/6514/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Vocal Ejecutiva en el estado de Querétaro se notificara el diverso INE/UTF/DRN/6515/2017 al Representante y/o Apoderado Legal de Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V., en el que reiteró el requerimiento formulado en el inciso a). (Fojas 196 del expediente)
- e) El veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/VS/365/2017, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Querétaro remitió el acta circunstancia número INE/CIRC031/JLE/QRO/12-05-17 en la que se asentó que no se localizó a nadie en el domicilio previo citatorio por lo que procedió a notificar por estrados, así como las constancias de notificación respectivas. (Fojas 197-215 del expediente)
- f) El catorce de junio de dos mil diecisiete, se recibió vía correo electrónico, la respuesta al requerimiento de información referido en el inciso anterior, signado por el Representante Legal de Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V., mediante el cual confirmó las operaciones celebradas con el sujeto obligado. (Fojas 221-225 del expediente)
- g) El quince de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/12344/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Querétaro, se notificara el diverso INE/UTF/DRN/12343/2017 al Representante y/o Apoderado Legal de Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V. por el cual se le requería aclarar el origen de la diferencia entre el año de emisión de las facturas y la anualidad del servicio prestado. (Fojas 233-234 del expediente)
- h) El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/VS/549/2017, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Querétaro remitió las constancias de la notificación respectiva. (Fojas 235-249 del expediente)
- i) El siete de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió vía correo electrónico, el escrito de respuesta al requerimiento de información referido en el inciso anterior, signado por el representante legal de Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V. (Fojas 459-460 del expediente)

X. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante SAT).

- a) El primero de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/1938/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al SAT, información relativa al domicilio fiscal de la persona moral denominada “Servicios y Asesorías Traca S.A. de C.V.”. (Foja 187 del expediente)
- b) El nueve de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio número 103-05-2017-0268, la C. Juana Martha Avilés González, en su carácter de Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos del SAT, informó que fue localizado un registro con los datos proporcionados por la Unidad y remitió la documentación correspondiente. (Fojas 188-192 del expediente)
- c) El quince de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/13673/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al SAT, información relativa al nombre de los representantes legales registrados ante esa dependencia por la persona moral denominada “Servicios y Asesorías Traca S.A. de C.V.”. (Foja 259 del expediente)
- d) El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número 103-05-2017-1304, el Administrador Central de Evaluación de Impuestos Internos del SAT, remitió la información solicitada. (Fojas 260-261 del expediente)
- e) El cuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/23396/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al SAT, información relativa al domicilio fiscal del C. José Alberto Mares Hernández. (Fojas 468-469 del expediente)
- f) El once de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio número 103-05-04-2018-0180, la Administradora de Evaluación de Impuestos Internos “4” del SAT, remitió la información solicitada. (Fojas 471-473 del expediente)
- g) El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/42341/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al SAT, información relativa a la situación fiscal de la persona moral denominada “Servicios y Asesorías Traca S.A. de C.V.” (Foja 507 del expediente)
- h) El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número 103-05-05-2018-0179, la Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos

“5” del SAT, remitió la información y documentación solicitada. (Fojas 508-548 del expediente)

- i) El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/3599/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al SAT, información relativa a la verificación y validación de los comprobantes fiscales materia del presente procedimiento. (Foja 596-597 del expediente)
- j) El dos de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio número 103-05-05-2019-0220, la Administradora de Evaluación de Impuestos Internos “5” del Servicio de Administración Tributaria, remitió la representación gráfica de los 7 CFDI consultados. (Fojas 606-621 del expediente)
- k) El nueve de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/4526/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio de Administración Tributaria, información relativa a las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros de las personas morales Servicios y Asesorías Traca, S. A. de C.V. y Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V., así como los CFDI emitidos y recibidos por las personas morales en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 (Foja 622-623 del expediente)
- l) El doce de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio número 103-05-05-2019-0276, la Administradora de Evaluación de Impuestos Internos “5” del Servicio de Administración Tributaria, remitió la información y documentación solicitada. (Fojas 624-625 del expediente)
- m) El nueve de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/6432/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio de Administración Tributaria, información relativa al tratamiento que debe darse a los comprobantes fiscales emitidos por personas incluidas en el Listado Definitivo de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes. (Foja 626-627 del expediente)
- n) El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 103-05-05-2019-0402, la Administradora de Evaluación de Impuestos Internos “5” del Servicio de Administración Tributaria, dio respuesta a la información solicitada. (Fojas 633-634 del expediente)

XI. Ampliación de plazo para resolver.

- a) El siete de abril de dos mil diecisiete, dada la naturaleza de las pruebas ofrecidas, la línea de investigación y las diligencias que debían realizarse para sustanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, la Unidad de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo que otorgan los ordenamientos legales para presentar ante el Consejo General el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 193 del expediente)
- b) El diez de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3101/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, el Acuerdo referido en el inciso anterior. (Foja 194 del expediente)
- c) El diez de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3100/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto, el Acuerdo referido en el inciso a). (Foja 195 del expediente)

XII. Razones y Constancias.

- a) El once de julio de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la recepción vía correo electrónico de diversas contestaciones a los requerimientos realizados con motivo de la investigación de hechos materia del procedimiento de mérito. (Fojas 218-232 del expediente).
- b) El doce de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la recepción, vía correo electrónico, de la contestación al requerimiento realizado a la persona moral Servicios y Aplicaciones Integra S.A. el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. (Fojas 459-460 del expediente).
- c) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la recepción, vía correo electrónico, del acta circunstanciada AC22/JD13/MEX/24-04-18, signada por el Auxiliar Jurídico de la Junta Distrital Ejecutiva 13 en la Ciudad de México, en la cual se hizo constar la imposibilidad para notificar y requerir al C. José Alberto Mares Hernández. (Fojas 490-492 del expediente).
- d) El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la validación y verificación de los comprobantes fiscales materia del presente procedimiento, en el sitio oficial para la verificación de comprobantes fiscales del SAT. (Fojas 493-506 del expediente).

- e) El nueve de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la búsqueda en internet del domicilio de la persona moral Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V., sin embargo, se obtuvo el mismo domicilio registrado en las facturas emitidas. (Fojas 567-569 del expediente)
- f) El seis de febrero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar el estatus de “cancelado por no refrendo” dentro del Registro Nacional de Proveedores de la persona moral Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V. (Fojas 570-572 del expediente)
- g) El catorce de marzo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la devolución del expediente de mérito, por instrucción de la Comisión de Fiscalización a efecto de obtener mayores elementos de información para generar certeza en la investigación. (Foja 593 del expediente)
- h) El catorce de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar los resultados obtenidos de la búsqueda en el portal del SAT del listado definitivo de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes. (Foja 628-630 del expediente)
- i) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar los resultados obtenidos de la búsqueda en el Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía, con el objeto de obtener elementos que permitan la localización de la persona moral Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V., sin embargo, no se obtuvieron resultados. (Foja 635 del expediente)
- j) El ocho de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar los resultados obtenidos de la búsqueda en el Sistema Integral del Registro Federal de Electores, con el objeto de obtener los datos de identificación del C. Álvaro Trejo Antúnez, socio de la empresa Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V. (Fojas 717-718 del expediente)
- k) El nueve de septiembre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar los resultados obtenidos de la indagatoria en el buscador web *Google Maps*, con el objeto de obtener las características físicas del inmueble en donde presuntamente se ubican las instalaciones de la empresa Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V. (Fojas 782-783 del expediente)

- l) El nueve de septiembre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar resultados obtenidos de la indagatoria en el buscador web *Google Maps*, con el objeto de obtener las características físicas del inmueble en donde presuntamente se ubican las instalaciones de la empresa Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V. (Fojas 784-786 del expediente)
- m) El treinta y uno de enero de dos mil veinte, se hizo constar que fue proporcionada información consistente en: contratos de Servicios y Asesoría Traca S.A. de C.V., así como contratos de Servicios y Aplicaciones Integra S.A. de C.V., estado de cuenta y CFDI, a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgos de la Unidad Técnica de Fiscalización en medió magnético (CD). (Foja 871 del expediente).
- n) El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar resultados la búsqueda realizada en internet a efecto conocer el plazo máximo en la que tenían la obligación las personas morales de realizar su declaración anual, y consecuentemente, obtener información en la cual esta autoridad estuviera en posibilidad de solicitar información relacionada con los datos aportados por la declaración que presenten las empresas Servicios y Asesorías Traca, S. A. de C.V. y Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V., mismas que han sido materia de estudio del presente procedimiento sancionador. (Fojas 890-891 del expediente)
- o) El catorce de septiembre de dos mil veinte, se hizo constar una búsqueda en la página del Instituto Nacional Electoral, con el propósito de obtener información respecto a la militancia dentro del Partido Revolucionario Institucional de los ciudadanos Dulce Arely Oropeza y Erick Abacus Valdez Domínguez. (Fojas 924-925 del expediente).
- p) El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar los resultados obtenidos de la búsqueda en el portal del SAT del listado definitivo de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes. (Fojas 944-945 del expediente)
- q) El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la respuesta obtenida en la solicitud de información dirigida al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (Fojas 999-1001 del expediente)

- r) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar los resultados obtenidos de la búsqueda de la información de contacto de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad. (Fojas 1036-1040 del expediente)
- s) El nueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la respuesta obtenida en la solicitud de información dirigida a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad de la Secretaría de Gobernación. (Fojas 1041-1045 del expediente)
- t) El veintiocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar los resultados obtenidos de la búsqueda de la información de los contribuyentes relacionados en la lista relacionada al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. (Fojas 1046-1049 del expediente)
- u) El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar los resultados obtenidos de la búsqueda de la información útil para la identificación del domicilio actual del C. Álvaro Trejo Antúnez. (Fojas 1050-1051 del expediente)

XIII. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección Jurídica).

- a) El trece de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/471/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección Jurídica realizara la búsqueda e identificación de los datos de ubicación de los ciudadanos José Alberto Mares Hernández y Antonio Primo Cruz, en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores. (Foja 262 del expediente).
- b) El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/DSL/SSL/25176/2017, el Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica, Lic. Cuitláhuac Villegas Solís, remitió las cédulas de detalle de los registros coincidentes con la base de datos del Padrón Electoral con los nombres solicitados. (Fojas 263-265 del expediente).

XIV. Requerimiento de información al C. José Alberto Mares Hernández

- a) El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, mediante acuerdo de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo Local en el Estado de México, realizara lo conducente a efecto de notificar al C. José Alberto Mares

Hernández, Representante y/o Apoderado Legal de Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V., el requerimiento formulado para que confirmara el haber expedido cuatro facturas a nombre del Partido Revolucionario Institucional y aclarara las diferencias existentes entre la anualidad de la prestación del servicio y la de la expedición de los comprobantes. (Fojas 266-267 del expediente).

- b) El once de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JLMEX/UTF/015/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, remitió el acta circunstanciada número 01/CIRC/UTF/INE/MEX/04-01-2018, en la cual quedó asentado que el notificador no localizó a nadie en el domicilio y los vecinos le refieren no conocer al requerido. (Fojas 285-297 del expediente).
- c) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, mediante acuerdo de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo del Estado de México realizara lo conducente a efecto de notificar en su domicilio fiscal al C. José Alberto Mares Hernández, Representante y/o Apoderado Legal de Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V., el requerimiento formulado en el inciso a). (Fojas 476-477 del expediente).
- d) El quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JLMEX/UTF/237/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, remitió las constancias de notificación vía estrados en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) y 12 numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, lo anterior debido a la imposibilidad de notificar personalmente por no encontrarse nadie en el inmueble ni atender el citatorio respectivo. (Fojas 478-489 del expediente).
- e) El veinte de febrero de dos mil veinte, mediante Acuerdo de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo del estado de Sonora realizara lo conducente a efecto de notificar en su domicilio fiscal al C. José Alberto Mares Hernández, Representante y/o Apoderado Legal de Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V., el requerimiento formulado en el inciso a). (Fojas 879-820 del expediente).
- f) El quince de abril de dos mil veintiuno, mediante acuerdo de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo del Estado de México realizara lo conducente a efecto de notificar al C. José Alberto Mares Hernández, Representante y/o Apoderado Legal de Servicios y Asesorías Traca, S.A. de

C.V., el requerimiento formulado para que confirmara el haber expedido cuatro facturas a nombre del Partido Revolucionario Institucional y aclarara las diferencias existentes entre la anualidad de la prestación del servicio y la de la expedición de los comprobantes. (Fojas 1002-1004 del expediente)

- g) El cinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE-JLMEX/VE/UTF/087/2021, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, remitió las constancias de notificación vía estrados en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) y 12 numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, lo anterior debido a la imposibilidad de notificar personalmente por no ser el domicilio de la persona a notificar. (Fojas 1005-1034 del expediente).
- h) El siete de diciembre de dos mil veintiuno, mediante acuerdo de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo del Estado de México realizara lo conducente a efecto de notificar al C. José Alberto Mares Hernández, Representante y/o Apoderado Legal de Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V., el requerimiento formulado para que confirmara el haber expedido cuatro facturas a nombre del Partido Revolucionario Institucional y aclarara las diferencias existentes entre la anualidad de la prestación del servicio y la de la expedición de los comprobantes. (Fojas 1054-1059 del expediente)
- i) El trece de enero de dos mil veintidós, mediante oficio INE-JL-MEX/VE/UTF/004/2022, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, remitió las constancias de notificación vía estrados en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) y 12 numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, lo anterior debido a la imposibilidad de notificar personalmente por no ser el domicilio de la persona a notificar. (Fojas 1060-1071 del expediente).

XV. Requerimiento de información al C. Antonio Primo Cruz

- a) El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, mediante acuerdo de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo en la Ciudad de México realizara lo conducente a efecto de notificar al C. Antonio Primo Cruz, Representante y/o Apoderado Legal de Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V., el requerimiento formulado para que confirmara el haber expedido cuatro

facturas a nombre del Partido Revolucionario Institucional y aclarara las diferencias existentes entre la anualidad de la prestación del servicio y la de la expedición de los comprobantes. (Fojas 268-269 del expediente).

- b) El veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, se recibió el escrito de contestación al requerimiento de mérito, signado por el C. Antonio Primo Cruz mediante el cual negó tener relación alguna con la persona moral Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V. o con el Partido Revolucionario Institucional, por otra parte, manifestó dedicarse a otra actividad distinta a la ofrecida por la empresa. (Foja 270 del expediente).
- c) El dos de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-CM/08597/2017, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, remitió el acta circunstancia de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil diecisiete, así como las constancias de notificación respectivas. (Fojas 271-284 del expediente).

XVI. Requerimiento de información al C. Álvaro Trejo Antúnez

- a) El ocho de agosto de dos mil diecinueve, mediante acuerdo de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo del Estado de México realizara lo conducente a efecto de notificar al C. Álvaro Trejo Antúnez, socio accionista de Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V., el requerimiento formulado para que confirmara el haber expedido cuatro facturas a nombre del Partido Revolucionario Institucional y aclarara las diferencias existentes entre la anualidad de la prestación del servicio y la de la expedición de los comprobantes. (Fojas 719-720 del expediente)
- b) El primero de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE-JLMEX/UTF/096/2019, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, remitió las constancias de notificación vía estrados en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) y 12 numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, lo anterior debido a la imposibilidad de notificar personalmente por ya no vivir en el domicilio. (Fojas 798-810 del expediente).
- c) El quince de abril de dos mil veintiuno, mediante acuerdo de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo del Estado de México realizara lo conducente a efecto de notificar al C. Álvaro Trejo Antúnez, socio accionista de

Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V., el requerimiento formulado para que confirmara el haber expedido cuatro facturas a nombre del Partido Revolucionario Institucional y aclarara las diferencias existentes entre la anualidad de la prestación del servicio y la de la expedición de los comprobantes. (Fojas 1002-1004 del expediente)

- d) El cinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE-JLMEX/VE/UTF/087/2021, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, remitió las constancias de notificación vía estrados en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) y 12 numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, lo anterior debido a la imposibilidad de notificar personalmente por no ser el domicilio de la persona a notificar. (Fojas 1005-1034 del expediente).

XVII. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante CNBV).

- a) El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/4310/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la CNBV, información relativa al titular, estatus y expediente de contratación de las cuentas *****470 y *****812. (Fojas 298-300 del expediente).
- b) El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio número 214-4/7905184/2018, el Director General Adjunto de Atención a Autoridades, remitió de forma parcial la información solicitada. (Fojas 301-454 del expediente).
- c) El nueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio número 214-4/7905176/2018, el Director General Adjunto de Atención a Autoridades, remitió de forma parcial la información solicitada. (Fojas 455-458 del expediente).
- d) El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio número 214-4/7905405/2018, el Director General Adjunto de Atención a Autoridades, remitió la información faltante. (Fojas 461-463 del expediente).

XVIII. Oficio a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (ahora FEDE). Derivado de las diligencias realizadas se advirtieron hechos controvertidos en relación al Registro Federal de Electores; por consiguiente, el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/19798/2018, se dio vista a la Fiscalía por la posible violación a

diversas disposiciones legales que no son materia de fiscalización. (Fojas 464-465 del expediente).

XIX. Oficio a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (en adelante DERFE).

- a) Derivado de las diligencias realizadas se advirtieron hechos controvertidos en relación al Registro Federal de Electores; por consiguiente, el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/19796/2018, se dio vista a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por la posible violación a diversas disposiciones legales que no son materia de fiscalización. (Fojas 466-467 del expediente)
- b) El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DJ/DSL/SAP/8187/2018, la Dirección Jurídica solicitó a la Dirección de Resoluciones y Normatividad información relacionada con el procedimiento y a los hechos que fueron puestos a consideración de la DERFE. (Foja 470 del expediente)
- c) El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/0270/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad dio respuesta a la solicitud formulada por el titular de la Dirección Jurídica. (Fojas 474-475 del expediente)

XX. Emplazamiento a la Representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

- a) El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/44952/2018, la Unidad de Fiscalización, emplazó al representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo General de este Instituto, para que en un plazo improrrogable de cinco días hábiles manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara procedentes. (Fojas 549-551 del expediente).
- b) El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio signado por el Lic. Gerardo Triana Cervantes, en su carácter de representante suplente del Partido, dio respuesta al oficio señalado en el inciso que antecede, el cual en términos de los que establece el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente, se transcribe a continuación: (Fojas 552-566 del expediente).

“(…)

Es importante señalar que en el oficio INE7UTF7DRN/44952/2018 por medio del cual esta Autoridad realizó la notificación del supuesto emplazamiento, no se indicó a nuestro instituto político las causas específicas por las que a su juicio existían elementos para acreditar una posible infracción a la normatividad electoral, toda vez que se limitó a referir que... [SE TRANSCRIBE]..., sin precisar cuál es la falta cometida, ni tampoco se indican los razonamientos y argumentos que llevaron a concluir que se trasgredió la normativa electoral. Lo anterior deja al Partido Revolucionario Institucional en un completo estado de indefensión...

Aunado a lo anterior, debe precisarse que esa Autoridad fue omisa en proporcionar los elementos necesarios para determinar la procedencia del mismo, toda vez que se omitió correr traslado en medio electrónico de TODAS las constancias que integran el expediente situación que a todas luces resulta ilegal, y en claro incumplimiento a lo establecido en el artículo 35, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización...

De lo anterior, se concluye que el expediente electrónico remitido por esa H. Autoridad a mi representado se encuentra incompleto, siendo que, es ilógico inferir que existe más información que no está siendo proporcionada, vulnerando la garantía de audiencia y certeza respecto a los efectos que la omisión de información por parte de esa H. Autoridad pueda tener en perjuicio de este instituto político al momento de la emisión de la correspondiente resolución. (...)

El presente procedimiento oficioso carece de sustento, toda vez que, esa H. Autoridad parte de la premisa errónea de considerar que la emisión extemporánea del comprobante fiscal de la operación a cargo del proveedor de un servicio, es un acto imputable al receptor de la factura, y en su caso un hecho sancionable a través de este procedimiento, como pretendió justificar en el Considerando 18.1.1, inciso m), conclusión 48, de la Resolución INE/CG808/2018...

De lo anterior, se desprende que el presente procedimiento oficioso fue iniciado a partir de la confusión que esa H. Autoridad tiene respecto a las obligaciones en materia fiscal que las partes en un contrato de prestación de servicios tienen a su cargo, siendo que, en los respectivos Contratos de Prestación de Servicios celebrados entre este Instituto Político en su carácter de cliente, y los proveedores Servicios y Asesoría Traca, S.A. de C.V. y Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V., en su carácter de prestadores, acordaron en la Cláusula Quinta, la obligación por parte del partido de realizar el pago por concepto de contraprestación, y la obligación del proveedor de expedir la factura

correspondiente, la cual deberá contener los requisitos exigidos por las disposiciones fiscales aplicables...

De lo anterior, se desprende que es el proveedor el sujeto obligado a emitir la factura conforme a los requisitos establecidos en la ley, ergo, de existir alguna irregularidad respecto a la legal emisión de un comprobante fiscal, dicha irregularidad debe ser atribuible al emisor, siendo que, además esta autoridad fiscalizadora no es el ente facultado para llevar a cabo el procedimiento de investigación y sanción por tal ilícito.

En ese tenor, mediante escrito de fecha 27 de agosto de 2017, el proveedor Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V., manifestó su responsabilidad respecto a la emisión de comprobantes fiscales en el año 2016 que refieren operaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2015, atribuyéndolos a un problema en su software de facturación.

Así, encontramos que, mi representado en todo momento dio cabal cumplimiento, 1) a las obligaciones contraídas mediante relación contractual con los citados proveedores; y 2) a las obligaciones en materia de fiscalización al registrar de forma oportuna cada una de las operaciones llevadas a cabo, permitiendo a esta autoridad la corroboración del origen, aplicación y el destino de los recursos destinados a los partidos políticos.

Por todo lo anterior, y con fundamento en los artículos 26, numeral 5, 30, fracción I, 31, numeral 1, fracción II, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, se solicita a esa autoridad, que deseche el presente procedimiento por ser notoriamente improcedente al derivar de observaciones inverosímiles, ya que no configuran algún ilícito sancionable. (...)

Del oficio se desprende que la Autoridad fiscalizadora presupone que este instituto político, supuestamente cometió una infracción al artículo 127 del Reglamento de Fiscalización...

Ahora bien, como se ha venido señalando, la autoridad sin sustento ni motivación alguna pretende ajustar al actuar de mi representando en una contravención a lo ordenado por el Reglamento de Fiscalización, siendo que, del análisis realizado al citado artículo no se puede desprender situación concreta alguna que mi representado haya realizado u omitido en contravención a la ley. (...)

De lo anterior, nuevamente concluimos que este instituto político, en estricto apego a la normatividad electoral, dio cabal cumplimiento al principio de transparencia, presentando los informes que por ley está obligado, mediante los

cuales se da conocer el manejo de los recursos, asimismo, cumplió con la obligación de permitir la práctica de auditorías y verificaciones, así como entregar la documentación que fue requerida respecto a sus ingresos y egresos.

La anterior reflexión sirve para aclarar a esta autoridad que, los gastos que amparan las facturas de los proveedores Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V., y Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V., fueron registrados y realizados como lo establece el Reglamento de Fiscalización, esto es en el momento en el que se devengaron efectivamente los servicios y en atención a las fechas de cumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como se desprende de la información proporcionada en el Informe anual así como en las respectivas respuestas a los oficios de errores y omisiones correspondientes; teniendo la autoridad la facultad de constatar la fecha efectiva de pago de las obligaciones contractuales en el estado de cuenta y el contrato que fueron puestos a su disposición. (...)

Por lo anterior, es que el emplazamiento ordenado mediante oficio INE/UTF/DRN/44952/2018, es infundado, toda vez que, mi representado no incumplió la normativa en material electoral señalada.

Por todo lo anterior, y con fundamento en los artículos 26, numeral 5, 30, fracción I, 31, numeral 1, fracción II, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización se solicita a esa autoridad, que deseche el presente procedimiento por ser notoriamente improcedente al derivar de observaciones inverosímiles, que aun siendo ciertos, no configuran en abstracto alguna infracción sancionable a través de este procedimiento. (...)"

- c) El doce de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/416/2021, y en virtud de que en el desahogo de la investigación se presentaron nuevos hallazgos que serán tomados en cuenta al sustanciar el presente procedimiento y a fin de no dejar al sujeto obligado en estado de indefensión y maximizar su garantía de audiencia, se notificó al representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo General de este Instituto, para que en un plazo improrrogable de cinco días hábiles manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara procedentes. (Fojas 947-962 del expediente).
- d) El veintiuno de enero de dos mil veintiuno, la representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto mediante escrito sin número desahogó la garantía de audiencia brindada, presentando los argumentos de su consideración. (Fojas 963-985 del expediente)

XXI. Requerimiento de información a la Representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

- a) El veintidós de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/3600/2019, la Unidad de Fiscalización requirió a la representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo General de este Instituto, para que proporcionara evidencias, muestras o entregables que demostraran haber recibido los servicios contratados, mismos que son objeto del presente procedimiento. (Fojas 594-595 del expediente).
- b) El primero de abril de dos mil diecinueve, la representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto dio respuesta al requerimiento formulado, argumentando que al tratarse de servicios de asesoría las muestras y evidencias se vieron reflejadas en los resultados presentados en su informe anual 2015. (Fojas 598-605 del expediente)
- c) El dieciocho de febrero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/1672/2020, la Unidad de Fiscalización requirió a la representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, para que informara de manera detallada en relación a los servicios que contrató con las empresas Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V. y Servicios y Aplicaciones Integra S.A. de C.V. (Fojas 873-878 del expediente).
- d) El veintiséis de febrero de dos mil veinte, mediante oficio sin número la Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional dio respuesta al requerimiento de la autoridad, señalando en términos generales que el partido ha presentado todas las evidencias para acreditar que no incumplió con la normativa electoral, señalo los números de oficios y documentación que con anterioridad había presentado para acreditar los servicios que le fueron prestados por las empresas Traca S.A de C.V. y Servicios y Aplicaciones Integra S.A. de C.V. (Fojas 881-889 del expediente).
- e) El once de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/44121/2021, la Unidad de Fiscalización notificó a la representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, los medios para la realización de las ulteriores comunicaciones en el marco de la sustanciación del procedimiento de mérito. (Fojas 1052-1053 del expediente).

XXII. Solicitud de información a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo (en adelante Dirección de Riesgo).

- a) Mediante oficios INE/UTF/DRN/427/2019 e INE/UTF/DRN/587/2019, de fechas treinta de mayo y tres de julio de dos mil diecinueve, respectivamente, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Riesgo, remitiera copia del acta constitutiva de la persona moral Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V. (Fojas 636 y 640 del expediente)
- b) Mediante oficios INE/UTF/DAOR/0809/2019 e INE/UTF/DAOR/0820/2019, de fechas tres y nueve de julio de dos mil diecinueve, la Dirección de Riesgo proporcionó la información solicitada. (Fojas 641-712 del expediente).
- c) Mediante oficios INE/UTF/DRN/672/2019 e INE/UTF/DRN/710/2019, de fechas quince de julio y nueve de agosto de dos mil diecinueve, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Riesgo, realizara lo conducente a efecto de solicitar al Servicio de Administración Tributaria entre otras cosas, una opinión técnica respecto del valor que debe otorgarse a los comprobantes fiscales emitidos por la persona moral Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V. misma que fue incluida en el listado definitivo de personas con operaciones presuntamente inexistentes. (Fojas 715-716, 721-722 del expediente)
- d) El doce de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DAOR/0903/2019, la Subdirectora de Metodologías y Administración de Riesgos, remitió el oficio 103-05-05-2019-0672, signado por la Administradora de Evaluación de Impuestos Internos "5", por medio del cual proporcionó la información solicitada. (Fojas 723-750 del expediente).
- e) El seis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/788/2019, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Riesgo, realizara lo conducente a efecto obtener información relacionada con los socios de las personas morales Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V. y Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V. (Fojas 780-781 del expediente)
- f) El cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/885/2019, la Dirección de Resoluciones y Normatividad

nuevamente solicitó a la Dirección de Riesgos, realizara lo conducente a efecto obtener información referida en el inciso anterior. (Fojas 827-828 del expediente)

- g) El siete de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DAOR/01118/2019, la Dirección en comento dio respuesta a los requerimientos, remitiendo la información solicitada. (Fojas 830-858 del expediente)
- h) El veinticinco de junio del dos mil veinte, mediante oficio número INE/UTF/DAOR/0445/2020, la Dirección de Riesgos informó la tipología que instrumentó para investigar a las personas morales y físicas relacionadas con las operaciones materia del procedimiento y señaló los hallazgos obtenidos. (Fojas 892-915 del expediente)
- i) El diecinueve de octubre del dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DAOR/0791/2020, la Dirección en comento dio respuesta a los requerimientos, remitiendo la información solicitada. (Fojas 933-943 del expediente)
- j) El siete de octubre del dos mil veinte, mediante circular electrónica sin número, la Dirección de Resoluciones y Normatividad, remitió comentarios del análisis a la información enviada por la citada Dirección de Riesgos (Fojas 916-919 del expediente).
- k) El veintisiete de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/367/2020, la Dirección de Resoluciones y Normatividad nuevamente solicitó a la Dirección de Riesgos, remita toda la información y documentación con que cuente con relación a las operaciones investigadas, así como la relativas a los ciudadanos referenciados en la investigación. (Fojas 926-932 del expediente)

XXIII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Programación Nacional.

- a) El seis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/787/2019, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Programación Nacional (ambas de la Unidad Técnica de Fiscalización), información relativa al listado de sujetos obligados que realizaron operaciones con las personas morales Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V. y Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V., desde la fecha de su inscripción

al Registro Nacional de Proveedores hasta la fecha de cancelación del mismo. (Fojas 776-777 del expediente)

- b) El diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DPN/10318/2019, la Dirección de Programación Nacional informó que durante el ejercicio 2015 los proveedores en comento se encontraban debidamente registrados en el RNP con independencia de su status; sin embargo, por lo que hace al resto de la información la solicitud debía ser dirigida a la Dirección de Auditoría. (Fojas 787-788 del expediente)

XXIV. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en funciones de Coordinación de Oficialía Electoral (en adelante, Oficialía Electoral).

- a) El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/815/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Oficialía Electoral de este Instituto, que, en colaboración a la investigación de los hechos denunciados, verificara y certificara la existencia, ubicación y características de los domicilios de las personas morales Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V. y Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V. (Fojas 791-792 del expediente)
- b) El veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/1823/2019, la Oficialía Electoral remitió el acuerdo de admisión recaído al expediente INE/DS/OE/156/2019, formado con motivo de la solicitud referida en el inciso que antecede. (Fojas 793-797 del expediente)
- c) El siete de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/1858/2019, la Oficialía Electoral remitió dos actas circunstanciadas con la certificación solicitada. (Fojas 811-826 del expediente)

XXV. Solicitud de información al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- a) El dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/11797/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, que informara si la empresa Servicio y Asesorías Traca, S.A. de C.V., se encuentra dentro del registro patronal en poder de esa dependencia. (Fojas 859-860 del expediente).

- b) El diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve, mediante oficio 0952179073/7945/2019, remitió la información solicitada. (Fojas 861-862 del expediente).
- c) El veintidós de enero del dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/796/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, que informara los datos de ubicación o domicilio con que cuenta en la base de datos de esa dependencia de los CC. José Alberto Mares Hernández y Álvaro Trejo Antúnez, socios accionistas de la empresa Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V. (Fojas 863-864 del expediente)
- d) El once de febrero del dos mil veinte, mediante oficio 0952189223/481/20250, el Instituto remitió la información solicitada. (Foja 872 del expediente).

XXVI. Solicitud de información a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

- a) El veintidós de enero del dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/797/2020 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Secretario de Relaciones Exteriores, que informara los datos de ubicación o domicilio con que cuenta en la base de datos de esa dependencia de los CC. José Alberto Mares Hernández y Álvaro Trejo Antúnez, socios accionistas de la empresa Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V. (Fojas 865-866 del expediente).
- b) El veintiocho de enero del dos mil veinte, mediante oficio DGD1295/2020, la Secretaría remitió la información solicitada. (Fojas 867-868 del expediente).

XXVII. Solicitud de información al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

- a) El quince de febrero de dos mil veintiuno, mediante acuerdo de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo en la Ciudad de México realizara lo conducente a efecto de notificar al Mtro. Carlos Martínez Velázquez, Director General del INFONAVIT, la solicitud de información respecto del domicilio o datos de ubicación de los ciudadanos Álvaro Trejo Antúnez y José Alberto Mares Hernández. (Fojas 986-987 del expediente).
- b) El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-CM/1208/2021, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, remitió las constancias de la notificación realizada. (Fojas 988-996 del expediente).

c) El tres de marzo del dos mil veintiuno, mediante oficio CGRF/GSF/2021/396 el Instituto remitió la información solicitada. (Foja 1001 del expediente).

XXVIII.- Declaración de pandemia. El once de marzo de dos mil veinte la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de coronavirus COVID-19.

XXIX. Acuerdos de la Junta General. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Junta General aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE34/2020, diversas medidas preventivas y de actuación derivadas de la citada contingencia sanitaria.

En dicho acuerdo se estableció, entre otros aspectos, que los titulares de cada una de las Direcciones, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados del Instituto previeran facilidades a los servidores adscritos en cada una de sus áreas, a fin de procurar que las actividades se realizaran con el personal mínimo e indispensable, mediante la implementación de guardias presenciales en casos que por su naturaleza fueran de carácter urgente.

Por lo que toca a la sustanciación de procedimientos, en el acuerdo antes indicado se estableció que desde el diecisiete de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte no correrían plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, ordenó que se privilegiaran las notificaciones electrónicas, sobre las personales, en términos de lo dispuesto en la normativa aplicable.

El dieciséis de abril de dos mil veinte, la Junta General determinó modificar el citado acuerdo a través del diverso INE/JGE45/2020, a efecto de ampliar la suspensión de los plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos de este Instituto, así como cualquier plazo de carácter administrativo, hasta que se acordara su reanudación, con base en la información sobre las condiciones sanitarias relacionadas con la pandemia.

El veinticuatro de junio de dos mil veinte, mediante Acuerdo INE/JGE69/2020, aprobó la estrategia y metodología para el levantamiento de plazos relacionados con actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las actividades presenciales por parte del personal.

En dicho acuerdo determinó la conformación del Grupo Estratégico INE-C19, estableciendo entre sus facultades determinar las actividades que debían retomarse en cada Unidad Responsable, ya fuera de forma presencial o semipresencial, así como las modalidades de trabajo que se debían implementar a fin de dar continuidad a las actividades del Instituto.

El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento al diverso Acuerdo INE/CG185/2020, aprobó reformas al Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto; así como la implementación del uso de estrados electrónicos.

El veintisiete de marzo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG80/2020 por el que se autorizó, a través de herramientas tecnológicas, la celebración de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o extraordinarias, del Consejo General o la Junta General Ejecutiva, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19.

En esa misma fecha, mediante el diverso INE/CG82/2020, este Consejo General determinó la suspensión de plazos y términos relativos a actividades inherentes a la función electoral a cargo del INE, hasta que se contuviera la pandemia COVID19. Asimismo, se estableció que el Consejo General dictaría las determinaciones conducentes a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al ejercicio de sus atribuciones.

El veintiocho de mayo de dos mil veinte aprobó el Acuerdo INE/CG97/2020 por el que se reanudaron algunas actividades que habían sido suspendidas, relacionadas con la constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales, destacándose el uso de la notificación electrónica para ciertas diligencias relacionadas con los procedimientos de fiscalización.

El diecinueve de junio de dos mil veinte aprobó el Acuerdo INE/CG139/2020 por el que se implementó como medida extraordinaria y temporal la notificación por correo electrónico para comunicar las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores ordinarios.

El veintiseis de agosto de dos mil veinte se aprobó el Acuerdo INE/CG238/2020 por el que se determinó la reanudación de plazos en la investigación, instrucción, resolución y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de fiscalización, bajo la modalidad a distancia o semipresencial.

XXX. Acuerdo de reanudación de plazos.

- a) El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó la reanudación de la tramitación y sustanciación del procedimiento de mérito tras la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo de la pandemia del coronavirus, COVID-19. (Fojas 920-921 del expediente).
- b) El dos de septiembre del dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante, el acuerdo de la reanudación de la tramitación y sustanciación del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 922 del expediente)
- c) El siete de septiembre del dos mil veinte, se retiraron del lugar que ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo referido en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 923 del expediente)

XXXI. Acuerdo de Alegatos.

- a) El once de febrero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos y notificar a las partes involucradas para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran lo que consideraran conveniente. (Foja 573 del expediente)
- b) El doce de febrero de dos mil diecinueve través del oficio de INE/UTF/DRN/1838/2019, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, a efecto de que en un plazo de setenta y dos horas formulara sus alegatos. (Fojas 574-575 del expediente).
- c) El quince de febrero de dos mil diecinueve, el Partido Revolucionario Institucional mediante escrito sin número, a través de su representante Propietaria ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó los alegatos correspondientes. Fojas 576-592 del expediente)
- d) El catorce de marzo de dos mil diecinueve, la Comisión de Fiscalización ordenó la devolución del proyecto de resolución, para obtener mayores elementos informativos que generen certeza en la investigación realizada. (Foja 593 del expediente)

- e) El veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos y notificar a las partes involucradas para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran lo que consideraran conveniente. (Foja 751 del expediente)
- f) El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve través del oficio de INE/UTF/DRN/9905/2019, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, a efecto de que en un plazo de setenta y dos horas formulara sus alegatos. (Fojas 752-753 del expediente).
- g) El veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, el Partido Revolucionario Institucional mediante escrito sin número, a través de su representante Propietaria ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó los alegatos correspondientes. (Fojas 754-775 del expediente).
- h) Posterior a lo señalado en el inciso e), la autoridad sustanciadora conoció de elementos probatorios que ayudarían a esclarecer los hechos materia de investigación, por lo que determinó llevar a cabo mayores diligencias que serán tomadas en cuenta al emitir la resolución correspondiente.

En consecuencia, a lo señalado en el inciso anterior, para proteger y maximizar la garantía de audiencia del sujeto incoado, la Unidad Técnica de Fiscalización el diecinueve de enero de dos mil veintidós acordó abrir la etapa de alegatos y notificar a las partes involucradas para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran lo que consideraran conveniente. (Fojas 1072-1073 del expediente).

- i) El diecinueve de enero de dos mil veintidós a través del oficio de INE/UTF/DRN/617/2022, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, a efecto de que en un plazo de setenta y dos horas formulara sus alegatos. (Fojas 1074-1077 del expediente).
- j) Al momento de la elaboración del presente proyecto no se ha recibido respuesta del sujeto obligado.

XXXII. Cierre de instrucción. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 1078 del expediente)

XXXIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se formuló el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, por unanimidad de votos de los integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, las Consejeras Electorales Dra. Adriana M. Favela Herrera y Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, y el Consejero Presidente Mtro. Jaime Rivera Velázquez.

En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que, con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos y con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el cinco de enero de dos mil dieciocho y sesión ordinaria celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, Acuerdos INE/CG04/2018¹ e INE/CG614/2017², respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.

En este sentido, por lo que hace a la **normatividad sustantiva** tendrá que estarse a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las conductas denunciadas por los sujetos obligados, esto es, a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, así como en el Acuerdo **INE/CG263/2014**³, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual se expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogó el Reglamento de Fiscalización aprobado el cuatro de julio de dos mil once.

Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis relevante **Tesis XLVI/2002**, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “**DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL**” y el principio *tempus regit actum*, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización.

Ahora bien, por lo que hace a la **normatividad adjetiva o procesal** conviene señalar que, en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes

¹ Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG409/2017, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-623/2017.

² Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG264/2014, modificado a su vez con los acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.

³ El veintitrés de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el Acuerdo INE/CG350/2014, por el que modificó el Acuerdo INE/CG263/2014 únicamente por lo que refiere a los artículos 212, párrafos 4 y 7 y el artículo 350, párrafo 1, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados. El veintidós de enero de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de referencia. El veintitrés de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

relevantes, identificada con el rubro: “**RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL**”, no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo **INE/CG614/2017**.

3. Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458 numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

Ahora bien, con motivo de la reforma política del año 2014 este Instituto Nacional Electoral es el órgano encargado de la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos en el ámbito federal y local. De tal suerte, los partidos políticos nacionales sujetos al procedimiento de fiscalización cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que, en su caso, fueran impuestas toda vez que les fueron asignados recursos derivado del financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2022.

En virtud de lo anterior, es dable señalar que mediante el acuerdo **INE/CG1781/2021** aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la sesión extraordinaria de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se asignó a los partidos políticos el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2022, asignándole al Partido Revolucionario Institucional el financiamiento siguiente:

Partido Político Nacional	Financiamiento público para actividades ordinarias 2022
Partido Revolucionario Institucional	\$1,007,866,142

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera

estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, el partido político no cuenta con saldos pendientes al mes de febrero de 2022.

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el Partido Revolucionario Institucional, tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político nacional, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

4. Determinación del Valor de la Unidad de Medida y Actualización. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece *“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, en la presente resolución en el supuesto que se actualice la imposición de una sanción económica en días de salario al sujeto obligado, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización.

En sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad de votos la tesis que se cita a continuación:

Tesis LXXVII/2016

MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.- *En los artículos 26 y 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; segundo, tercero y quinto transitorio del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos respecto de los procesos electorales federales y locales; que la nueva Unidad de Medida y Actualización sustituiría la medición en base al salario mínimo, así como la obligación de todas las autoridades nacionales y estatales de adecuar sus disposiciones jurídicas para ese efecto, por lo que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, el cálculo y determinación del monto de las multas que se impongan por infracciones a las disposiciones en materia electoral deben realizarse de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de imponerlas.*

Quinta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016.—Actor: Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato.— Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.—30 de marzo de 2016.—Unanimidad de votos.— Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y acumulados.—Promoventes: Partido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridad responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.—22 de junio de 2016.— Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Jorge Alberto Medellín Pino, Ramiro Ignacio López Muñoz y Juan Guillermo Casillas Guevara.

No obstante lo anterior, al resolver el recurso de apelación con la clave alfanumérica SUP-RAP-759/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó el criterio con respecto al valor de la Unidad de Medida

impuesto como sanción debe ser el vigente al momento de la comisión de la infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al momento de emitirse la resolución sancionadora, en razón de que, de esa manera se otorga una mayor seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, pues se parte de un valor predeterminado precisamente por la época de comisión del ilícito, y no del que podría variar según la fecha en que se resolviera el procedimiento sancionador correspondiente, en atención a razones de diversa índole, como pudieran ser inflacionarias.

En consecuencia, determinó en la misma resolución, dejar sin efectos jurídicos la tesis relevante del rubro **MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.**

5. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y las facultades de investigación de esta autoridad y al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, así como del análisis de los documentos y actuaciones que integran el expediente, se desprende que el **fondo del presente asunto** se constriñe en determinar si el Partido Revolucionario Institucional comprobó y reportó verazmente egresos por un monto de \$5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) por concepto de servicios de asesoría contable, administrativa, financiera, logística, de soporte técnico y administración de información digital y física, en el marco de la revisión del Informe Anual de ingresos y gastos del Comité Ejecutivo Nacional, correspondiente al ejercicio dos mil quince.

En consecuencia, se debe determinar si el Partido Revolucionario Institucional incumplió con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a) y 78, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; así como el 127 del Reglamento de Fiscalización, mismo que establecen lo siguiente:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

- a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;*
(...)

Artículo 78.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes trimestrales y de gasto ordinarios bajo las directrices siguientes:

(...)

b) Informes anuales de gasto ordinario:

I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte;

II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe;

III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda, y

IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto.

(...)"

Reglamento de Fiscalización

"Artículo 127

Documentación de los egresos

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados en la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, el periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos

políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis del Reglamento.”

De la normativa citada se desprende que los partidos políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite a la autoridad electoral fiscalizadora contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, la licitud de sus operaciones, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas y a la vez vigila que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.

Esto es, la finalidad de dichos preceptos es tutelar el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas utilizados en los procesos electorales, al establecer con toda claridad que los partidos políticos tienen entre otras, las siguientes obligaciones: i) registrar contablemente todos sus egresos; ii) soportarlos con la documentación que expida el sujeto obligado o que sea expedida a nombre de éste, con la información del proveedor del bien o servicio; y, iii) entregar la documentación veraz antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables.

De lo anterior, es posible sostener que la inobservancia de los artículos referidos vulneraría directamente la certeza, legalidad y la transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así pues, como se ha señalado es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad ejercer sus facultades de comprobación en tiempo y forma.

Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera transparente ante la autoridad, es por un lado inhibir conductas que tengan por

objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; y consecuentemente, que la misma permita garantizar que el actuar de dichos entes políticos, se desempeñó en estricto apego a los cauces legales.

En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que incluye la obligación de registrar la forma en que se hicieron los mismos) implica la obligación de los partidos políticos de reportar y comprobar con veracidad cada movimiento contable (ya sean ingresos o egresos).

Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el presente procedimiento sancionador.

En este sentido, de la lectura de la Resolución INE/CG880/2016 se advierte que en el procedimiento de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio 2015, el Partido Revolucionario Institucional presentó comprobantes de gastos expedidos en el ejercicio 2016, los cuales debieron ser emitidos en el ejercicio 2015; asimismo, no presentó las copias de las transferencias electrónicas con las cuales se realizaron pagos por un monto de \$5,000,000.00.

Al respecto, es importante precisar que la documentación soporte que presentó el partido en el marco de la revisión de los Informes Anuales 2015 respecto de dichas erogaciones, consistió en:

- Siete contratos de servicios celebrados en el mes de octubre de 2015
- Siete facturas expedidas en 2016
- Copia simple de un estado de cuenta de la institución bancaria Banorte correspondiente a la cuenta con terminación *****5500; sin embargo, es importante señalar que el documento exhibido en su primera página corresponde al estado de cuenta del mes de diciembre de dos mil quince, pero el detalle de los movimientos mensuales indica el mes de octubre del mismo año.

De la documentación en comento, se desprende lo siguiente:

- Cuatro contratos firmados con la empresa “Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V.” (en lo subsecuente Traca) por un monto total de \$2,536,000.00 (dos millones quinientos treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.), los cuales se detallan a continuación:

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/11/2017

Fecha de celebración	Vigencia	Objeto	Pago	Factura
15/julio/2015	15/07/2015 al 30/09/2015	“... los servicios profesionales consistentes en consultorías y asesoría en materia contable, administrativa, financiera y logística a nivel nacional...”	\$350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)	A-518
15/julio/2015	15/07/2015 al 30/09/2015	“... los servicios profesionales consistentes en consultorías y asesoría en materia contable, administrativa, financiera y logística a nivel nacional...”	\$910,000.00 (novecientos diez mil pesos 00/100 M.N.)	A-519
15/julio/2015	15/07/2015 al 30/09/2015	“... los servicios profesionales consistentes en consultorías y asesoría en materia contable, administrativa, financiera y logística a nivel nacional...”	\$746,000.00 (setecientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.)	A-520
15/julio/2015	15/07/2015 al 30/09/2015	“... los servicios profesionales consistentes en consultorías y asesoría en materia contable, administrativa, financiera y logística a nivel nacional...”	\$530,000.00 (quinientos treinta mil pesos 00/100 M.N.)	A-517

- Tres contratos firmados con la empresa “Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V.” (en lo subsecuente Integra), por un monto total de \$2,464,000.00 (dos millones cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), los cuales se detallan a continuación:

Fecha de celebración	Vigencia	Objeto	Pago	Factura
03/agosto/2015	03/08/2015 al 30/09/2015	“... los servicios profesionales consistentes en consultoría y asesoría en materia de logística organizacional, soporte técnico y administración de información digital y física de diversos tipos y a nivel nacional...”	\$790,000.00 (setecientos noventa mil pesos 00/100 M.N.)	A-300
03/agosto/2015	03/08/2015 al 30/09/2015	“... los servicios profesionales consistentes en consultoría y asesoría en materia de logística organizacional, soporte técnico y administración de información digital y física de diversos tipos y a nivel nacional...”	\$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)	A-299
03/agosto/2015	03/08/2015 al 30/09/2015	“... los servicios profesionales consistentes en consultoría y asesoría en materia de logística organizacional, soporte técnico y administración de información digital y física de diversos tipos y a nivel nacional...”	\$1,224,000.00 (un millón cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)	A-298

Resulta relevante traer a cuenta que, del análisis a los contratos señalados, se advierte que no definen las actividades a realizar, las fechas para su ejecución, el lugar de prestación de los servicios, ni los productos para evaluar el resultado;

tampoco se establece el perfil de las personas que prestarían el servicio ni la documentación para acreditar la suficiente capacidad técnica para otorgarlo.

Las facturas y contratos en comento tienen el carácter de documentales privadas en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 2 de Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, las cuales sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

De este modo, la autoridad sustanciadora realizó diligencias para allegarse de mayores elementos, por lo cual, mediante razones y constancias⁴, se validaron los comprobantes fiscales materia de observación con el objeto de confirmar su estado actual, en el sitio oficial para la verificación de comprobantes fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT)⁵ <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>, obteniéndose los siguientes resultados:

Factura	Fecha de emisión	Proveedor	Estado CDFI
A-517	12/02/2016	Servicios y Asesorías Traca, S. A. de C.V.	Vigente
A-518	12/02/2016	Servicios y Asesorías Traca, S. A. de C.V.	Vigente
A-519	12/02/2016	Servicios y Asesorías Traca, S. A. de C.V.	Vigente
A-520	12/02/2016	Servicios y Asesorías Traca, S. A. de C.V.	Vigente
A-300	12/02/2016	Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V.	Vigente
A-299	12/02/2016	Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V.	Vigente
A-298	12/02/2016	Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V.	Vigente

⁴ Al respecto, es de precisar que las razones y constancias en cita, constituyen pruebas documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

⁵ El **Servicio de Administración Tributaria (SAT)** es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria, con la misión de recaudar los recursos tributarios y aduaneros que la ley prevé, proporcionando al contribuyente las herramientas necesarias que faciliten el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales.

Por otra parte, con la finalidad de confirmar el pago de las operaciones efectuadas, se recurrió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), quien proporcionó los estados de cuenta y expedientes de apertura de las cuentas destino, a las cuales se hicieron las transferencias por parte del Partido Revolucionario Institucional.

De la respuesta proporcionada por la autoridad bancaria, se concluyó que los pagos estipulados en cada uno de los contratos, fueron cubiertos en su totalidad el veintiuno de octubre de dos mil quince, mediante transferencias bancarias a las siguientes cuentas:

Cuenta origen	Fecha de transferencia	Monto	Cuenta destino
BANORTE *****5500 Partido Revolucionario Institucional	21-oct-2015	\$350,000.00	BANORTE *****2812 Servicios y Asesorías Traca, S. A. de C.V.
	21-oct-2015	\$910,000.00	
	21-oct-2015	\$746,000.00	
	21-oct-2015	\$530,000.00	
	21-oct-2015	\$790,000.00	BANORTE *****2470 Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V.
	21-oct-2015	\$450,000.00	
	21-oct-2015	\$1,224,000.00	

Con lo precisado anteriormente, se pudo establecer que las erogaciones realizadas por el partido político fueron depositadas en cuentas de Traca e Integra.

Cabe hacer mención que la respuesta de la CNBV, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

A efecto de contar con mayores elementos que permitieran aclarar los hechos aquí analizados, se dirigió la línea de investigación a los proveedores que expidieron los comprobantes fiscales ya mencionados. Por lo anterior, se requirió a los representantes legales de las empresas (Integra y Traca), con el propósito que confirmaran haber prestado los servicios y emitido las facturas a nombre del Partido Revolucionario Institucional y además aclararan las diferencias existentes entre la anualidad de la prestación del servicio y la de la expedición de los comprobantes fiscales.

Ahora bien, de las diligencias en comento respecto a cada proveedor se pudo establecer lo que se señala a continuación:

❖ **Servicios y Asesorías Traca, S. A. de C.V.**

Por lo que respecta a la persona moral Traca, se solicitó la colaboración del Vocal Ejecutivo Local en el Estado de México a efecto de requerir a la referida persona moral, por lo que se acudió al domicilio disponible en los comprobantes fiscales expedidos por la misma; sin embargo, en el Acta Circunstancia número CIRC06/JD17/MEX/VE/0041/17, quedó asentada la imposibilidad para notificar al representante legal de Servicios y Asesorías Traca, S. A. de C.V., pues el domicilio correspondía a un domicilio particular en el que manifestaron no tener conocimiento de la existencia de dicha empresa.

Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información al Servicio de Administración Tributaria respecto al domicilio fiscal registrado por Traca, de este modo se tuvo conocimiento que el domicilio fiscal registrado por la empresa se encontraba en el estado de Puebla.

De la misma manera, mediante solicitud de colaboración, se requirió el apoyo de la estructura desconcentrada del Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla, con el objeto de realizar el requerimiento de información correspondiente; no obstante, al acudir al domicilio fiscal del citado proveedor, se encontró que corresponde a una casa particular en la que una de las habitantes manifestó ser inquilina y desconoció la existencia de la empresa buscada. Por lo cual, tampoco pudo realizarse la diligencia solicitada.

En aras de dar cumplimiento al principio de exhaustividad, se solicitó información nuevamente al Servicio de Administración Tributaria con el propósito de conocer el nombre del o los representantes legales registrados por la empresa ante dicha institución. En su respuesta, la autoridad hacendaria informó que los CC. José Alberto Mares Hernández y Antonio Primo Cruz eran las personas registradas como representantes legales de la empresa Traca.

Así, esta autoridad requirió a ambos ciudadanos, sin que se obtuvieran resultados satisfactorios pues, respecto del C. José Alberto Mares Hernández, en el domicilio registrado negaron conocerlo, circunstancia que quedó asentada en el acta 01/CIRC/UTF/INE/MEX/04-01-2018. Respecto al requerimiento hecho al C. Antonio Primo Cruz, éste manifestó no tener relación alguna con la empresa Traca ni con el partido político, por el contrario, afirmó dedicarse a una actividad totalmente diferente a la llevada a cabo por la persona moral en cuestión.

Aunado a lo anterior, y no obstante el cúmulo de diligencias realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización para la localización de la empresa Traca, nuevamente se solicitó el apoyo del Servicio de Administración Tributaria con la finalidad de obtener el acta constitutiva de dicha persona moral. De la información obtenida se tuvo conocimiento de que el C. Álvaro Trejo Antúnez es socio accionista de la empresa, motivo por el cual se intentó requerirlo sin obtener resultados satisfactorios pues, en el domicilio registrado por éste en la base de datos del Sistema Integral del Registro Federal de Electores, manifestaron que dicha persona ya no vive en ese sitio.

Ante las dificultades para lograr localizar a la empresa “Servicios y Asesorías Traca, S. A. de C.V.”, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección del Secretariado en funciones de Coordinación de la Oficialía Electoral, realizara una inspección ocular en el domicilio del mencionado proveedor para describir detalladamente las características físicas del inmueble y confirmara si en él se ubicaban las oficinas de Traca.

La inspección solicitada quedó asentada en el acta circunstanciada identificada con número AC03/OE/JD13/MEX/30-09-19 y, entre otras cosas, se dio cuenta de lo siguiente:

“(…)

*SEGUNDO: Una vez plenamente identificado el domicilio, se procedió a indagar en el inmueble si éstas eran las oficinas de la empresa denominada ‘Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V.’, tocamos el timbre, fuimos atendidos por la señora Romana Fraga Rodríguez, de 55 años aproximadamente, quien se identificó verbalmente como madre de la dueña del inmueble, sin proporcionar el nombre de su hija, aunque se le pidió y especificó que ésta última **había adquirido la propiedad hace cinco años y ella la estaba habitando desde hace dos años, manifestando también que durante ese periodo estaba segura que nunca había despachado la persona moral ‘Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V.’, ni tener conocimiento de algo similar; era utilizada como casa habitación, jamás como empresa o para giro comercial desde el periodo de adquisición.***

(…)” [énfasis añadido]

Se precisa que las actas circunstanciadas levantadas con motivo de las diligencias ordenadas, así como la información remitida por el Servicio de Administración Tributaria y la Oficialía Electoral, constituyen pruebas documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a

los hechos en ellas consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

En ese mismo orden de ideas, esta autoridad electoral solicitó al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Secretario de Relaciones Exteriores, a fin de que informaran el domicilio con que se cuenta en la base de datos de esa dependencia de los CC: José Alberto Mares Hernández y Álvaro Trejo Antúnez, socios accionistas de la empresa Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V., advirtiendo datos de identificación únicamente por lo que corresponde al C. José Alberto Mares Hernández; en ese sentido se solicitó apoyo de la estructura desconcentrada del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora, con el objeto de realizar el requerimiento de información correspondiente. No obstante, al acudir al domicilio de esa persona física, se informó que el requerido era un infante. Por lo cual, tampoco pudo realizarse la diligencia solicitada.

Ahora bien, bajo el irrestricto apego al principio de exhaustividad, esta autoridad agotó todas las vías y medios posibles para allegarse de información que permitiera aclarar las razones por las cuales las cuatro facturas expedidas por la persona moral Traca, por los montos ya mencionados con anterioridad, fueron emitidas en un ejercicio fiscal distinto a aquél en el cual se prestaron los servicios contratados. Es decir, esta autoridad realizó todas las diligencias a su alcance para requerir a “Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V.”, sin embargo, fue materialmente imposible su localización y, por el contrario, se tiene acreditado que el domicilio en donde presuntamente se ubican sus instalaciones, corresponde a una casa habitación cuyos habitantes desconocen la existencia de empresa alguna.

Ante la imposibilidad de confirmar las operaciones con el proveedor de servicios y tomando en consideración la falta de elementos que permitieran tener certeza sobre la realización de las operaciones, la autoridad sustanciadora requirió al sujeto obligado para que presentara las muestras, evidencias o entregables de los servicios contratados. En contestación a lo anterior, el partido político manifestó lo siguiente⁶:

“(…)

Con relación a este punto, es importante señalar que el servicio prestado por los proveedores en cuestión consistió en la orientación y asesoría

⁶ La respuesta tiene el carácter de documental privada en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 2 de Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, las cuales sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

*administrativa y logística, con la finalidad de mejorar el desempeño de los Comités Directivos Estatales, del Comité Directivo del entonces Distrito Federal, así como del Comité Ejecutivo Nacional, causando un impacto en la mejora en la rendición de cuentas del Partido Revolucionario Institucional, por ende **las muestras y/o evidencias se ven reflejadas en los resultados presentados en el informe Anual 2015.***
(...)” [énfasis añadido]

Por otro lado, se solicitó a la Dirección de Auditoría proporcionara las muestras, evidencias o entregables de los servicios contratados por el sujeto obligado por concepto de consultoría y asesoría contratados con la empresa en análisis. En su respuesta, la Dirección de Auditoría manifestó⁷:

“(…) *Como se puede observar en el cuadro anterior, los servicios contratados corresponden a asesorías y consultorías y **al ser bienes intangibles, no se cuenta con evidencia** de dichos gastos.*
(...)” [énfasis añadido]

En estas condiciones, no puede tenerse por acreditada la materialidad de los servicios registrados, pues esta autoridad no cuenta con elementos que le permitan tener certeza de que las operaciones fueron, efectivamente, llevadas a cabo. En cambio, existen indicios suficientes que enfatizan la sospecha de la inexistencia de las operaciones amparadas con los comprobantes fiscales presentados por el sujeto obligado.

Por los argumentos expuestos, mediante razón y constancia de fecha catorce de mayo del año en curso, se verificó en el portal oficial del SAT si la empresa denominada “Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V.” se encontraba en el listado de contribuyentes catalogados de acuerdo al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, es decir, en el listado de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes. De dicha verificación se obtuvo que la empresa no se encontraba considerada en dicho supuesto.

Sin embargo, la no inclusión de la empresa al listado de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes no puede considerarse como una prueba firme para dar por ciertas las operaciones que realizó, sobre todo cuando no es

⁷ Dicha respuesta constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

posible su ubicación ni la localización de sus socios y representantes. Aunado a ello, es importante mencionar que, derivado de la información recabada durante la sustanciación del procedimiento, se advirtió la posible violación a diversas disposiciones legales que no son materia de fiscalización de los partidos políticos, concretamente por los hechos mencionados a continuación:

- La persona moral Traca registró como representantes legales ante el Servicio de Administración Tributaria a los CC. José Alberto Mares Hernández y Antonio Primo Cruz.
- De acuerdo con la información remitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el C. Antonio Primo Cruz fungió como representante legal de la empresa Traca para firmar el contrato de apertura de la cuenta con terminación *****2812 en la institución bancaria IXE.
- El ciudadano en comento desconoció tener relación alguna con la persona moral Traca y/o el Partido Revolucionario Institucional e, inclusive, solicitó se le informara si había sido objeto de usurpación de identidad.
- De los documentos que obran en el expediente de apertura de cuenta bancaria, se obtuvo copia de la credencial de elector exhibida como identificación oficial ante la institución de banca, y se identificó que los datos contenidos en la credencial para votar presentada, no coinciden plenamente con los datos registrados en el Sistema Integral del Registro Federal de Electores a nombre del C. Antonio Primo Cruz, siendo las diferencias entre uno y otro la fotografía y firma del ciudadano.

En consecuencia, y con fundamento en el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización, al advertir la probable violación a disposiciones legales que no son materia de fiscalización, mediante oficios INE/UTF/DRN/19796/2018 e INE/UTF/DRN/19798/2018, dio vista a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electores (ahora Fiscalía Especializada en Delitos Electores) para que determinaran lo que en derecho correspondiera.

En tales circunstancias, las cuales menoscaban la credibilidad de las operaciones registradas por el sujeto obligado, resulta imperioso para esta autoridad contar con algún elemento objetivo que permita acreditar la **materialidad** de las operaciones pues, aunque los comprobantes fiscales fueron validados ante el Servicio de

Administración Tributaria y aparecen como “vigentes”, es conveniente hacer las siguientes precisiones:

De acuerdo al párrafo 8 de la Norma de Información Financiera⁸ (NIF) A-2, uno de los postulados básicos que fundamentan la operación del sistema contable es la SUSTANCIA ECONÓMICA. De acuerdo con la norma referida *“la sustancia económica debe prevalecer en la naturaleza de la operación sobre su forma jurídica, así como el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente a una entidad.”*⁹

Abundando en la propia explicación del postulado básico se tiene que:

“(…)

El sistema de información contable debe ser delimitado en forma tal que pueda ser capaz de captar la esencia económica del ente emisor de información financiera.

El reflejo de la sustancia económica debe prevalecer en el reconocimiento contable con el fin de incorporar los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente a una entidad, de acuerdo con su realidad económica y no solo en atención a su forma jurídica cuando una y otra no coincidan. Debe otorgarse, en consecuencia, prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal.

*Ello es debido a que **la forma legal de una operación puede tener una apariencia diferente al auténtico fondo económico de la misma** y, en consecuencia, no reflejar adecuadamente su incidencia en la situación económico-financiera. Por ende, las formalidades jurídicas deben analizarse en un contexto adecuado, a la luz de la sustancia económica, a fin de que no la tergiversen y con ello distorsionen el reconocimiento contable. (...).” [énfasis añadido]*

Es decir, de acuerdo con la serie “A” de las normas de información financiera, las operaciones registradas contablemente por cualquier entidad que emita información financiera (en el caso que nos ocupa, el partido político y la empresa Traca) deben contar con determinadas características cualitativas, entre ellas, deben ser **confiables**, relevantes, **compresibles**, **comparables**, **objetivos**, **veraces** y **verificables**.

⁸ Conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la información contenida en los estados financieros y que son aceptadas de manera generalizada en un lugar y fecha determinada.

⁹ NIF A-2 Postulados Básicos, párrafos del 8 al 11.

Dicho de otro modo, para que la información contenida en los estados financieros y contables pueda ser confiable debe ser congruente con los eventos sucedidos y debe poder comprobarse y validarse; lo que en el caso en estudio no acontece toda vez que:

- Las operaciones no pudieron confirmarse con el proveedor de servicios pues, a pesar de las múltiples diligencias realizadas, fue materialmente imposible su localización.
- El sujeto obligado no cuenta con informes, muestras, constancias, diplomas o cualquier otro indicio que permita acreditar la materialidad del supuesto servicio contratado.

Al respecto, resulta pertinente analizar, como criterio orientador, lo sustentado en la Jurisprudencia Administrativa con número de registro 2020068, Tesis: 2a./J. 78/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la SCJN, de rubro FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN; en donde el órgano jurisdiccional determinó que el procedimiento de verificación de operaciones tiene como objetivo acabar con el tráfico de comprobantes fiscales y evitar el daño generado a las finanzas públicas y a quienes cumplen con su obligación de contribuir al gasto público, lo cual pone de relieve que mediante este procedimiento no se busca como ultima ratio eliminar los efectos producidos por los comprobantes fiscales, sino detectar quiénes emiten documentos para soportar actividades o actos inexistentes; mientras que, para corroborar que los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos legales o que fueron idóneos para respaldar las pretensiones del contribuyente a quien le son emitidos, la autoridad cuenta con las facultades de comprobación contenidas en el Código Fiscal.

Derivado de lo anterior, la Suprema Corte estableció que en la especie se trata de procedimientos distintos y no es necesario que la autoridad haya llevado a cabo el procedimiento previsto en el artículo 69-B para que, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinara la improcedencia de las pretensiones del contribuyente basada en el hecho de que los actos o actividades registrados en su

contabilidad y respaldados en los comprobantes fiscales exhibidos eran inexistentes, toda vez que la atribución consignada en el artículo 69-B no excluye las facultades contempladas en el artículo 42 destinadas a comprobar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los causantes, dentro de las cuales se encuentra inmersa **la de verificar la materialidad de las operaciones** económicas gravadas. De tal manera que, si el contribuyente sujeto a las facultades de comprobación no acredita la real materialización de las actividades u operaciones registradas en su contabilidad y comprobantes fiscales, la autoridad fiscal válidamente podrá declarar su inexistencia, y determinar que esos documentos carecen de valor probatorio y, por ello, no podrá tomarlos en cuenta para efectos de la procedencia de la pretensión del contribuyente.

De acuerdo con la jurisprudencia citada, la validez de un comprobante fiscal es insuficiente para tener por comprobadas las operaciones registradas por el sujeto obligado, cuando éstos no se acompañan de elementos eficaces que acrediten la materialización de los servicios aducidos.

En las relatadas condiciones, por lo que hace a las operaciones presuntamente realizadas con la persona moral “Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V.”, puede concluirse lo siguiente:

- El partido político reportó erogaciones correspondientes al servicio de consultoría y asesoría en materia contable, administrativa, financiera y de logística a nivel nacional por un monto de \$2,536,000.00 (dos millones quinientos treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.)
- Con la documentación adjunta al reporte de gasto, se identificó una discrepancia entre el año de pago y la prestación de los servicios, con la anualidad de la emisión del comprobante fiscal correspondiente.
- El sujeto obligado no presentó en el Sistema Integral de Fiscalización, ni en respuesta a los requerimientos, evidencia alguna que acredite la materialidad de los servicios que afirma le fueron prestados.
- De acuerdo con las facultades de investigación de esta autoridad, se realizaron múltiples diligencias para localizar a la empresa Traca, sin embargo, fue materialmente imposible su localización.

- Se acreditó que el domicilio fiscal que la persona moral tiene registrado ante las autoridades competentes, corresponde a una casa habitación en la que desconocen la existencia de la empresa.
- El C. Antonio Primo Cruz, presunto representante legal de la empresa, abrió una cuenta bancaria a nombre de Traca con una credencial para votar que no coincide en foto ni firma con los datos contenidos en el Registro Federal de Electores, hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral. Adicionalmente, el ciudadano desconoció cualquier relación entre él y la empresa en estudio.

En las relatadas condiciones, esta autoridad no cuenta con elementos que permitan acreditar la materialidad de los servicios que el Partido Revolucionario Institucional afirma le fueron prestados por la persona moral “Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V.”, de ahí que se arribe a la conclusión que el partido político no reportó con veracidad las operaciones en estudio.

❖ **Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V.**

Ahora corresponde el estudio y análisis de las tres facturas restantes, emitidas por la persona moral Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V., por un monto total de \$2,464,000.00 (dos millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), que se detallan a continuación:

Factura	Fecha de celebración	Vigencia	Objeto	Pago
A-300	03/agosto/2015	03/08/2015 al 30/09/2015	“... los servicios profesionales consistentes en consultoría y asesoría en materia de logística organizacional, soporte técnico y administración de información digital y física de diversos tipos y a nivel nacional...”	\$790,000.00 (setecientos noventa mil 00/100 M.N.)
A-299	03/agosto/2015	03/08/2015 al 30/09/2015	“... los servicios profesionales consistentes en consultoría y asesoría en materia de logística organizacional, soporte técnico y administración de información digital y física de diversos tipos y a nivel nacional...”	\$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
A-298	03/agosto/2015	03/08/2015 al 30/09/2015	“... los servicios profesionales consistentes en consultoría y asesoría en materia de logística organizacional, soporte técnico y administración de información digital y física de diversos tipos y a nivel nacional...”	\$1,224,000.00 (un millón cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Primeramente, es dable señalar que la Unidad Técnica de Fiscalización requirió información al representante y/o apoderado legal de Integra en el domicilio que consta en las facturas expedidas, quien en su escrito de respuesta¹⁰ manifestó lo siguiente:

“(…)

Se confirman las operaciones antes descritas, se anexa al presente oficio la documentación que se enuncia a continuación:

I. Tres contratos de prestación de servicios, con sus anexos y facturas correspondientes por los montos de \$790,000.00 (Setecientos noventa mil pesos 00/100 m.n.), \$450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) y \$1,224,000.00 (Un millón doscientos veinticuatro mil pesos 00/100 m.n.).

II. El monto y forma de pago de las operaciones, se realizó de la forma siguiente:

[se inserta tabla]

*✓ Los pagos antes mencionados se recibieron de la cuenta bancaria número ****5500 de la institución bancaria BANORTE, de la cual es titular el Partido Revolucionario Institucional. Se remite copia del estado de cuenta donde se puede observar el detalle de la transferencia.*

(…)”

Como puede observarse, Integra confirmó la realización de las operaciones hechas con el partido político; sin embargo, no se pronunció respecto de las razones por las cuales expidió las facturas en un ejercicio fiscal distinto al de la prestación de los servicios. Por tal razón, se realizó un segundo requerimiento al cual dio respuesta en los términos siguientes:

“(…)”

Para complementar la información previamente solicitada hacemos de su conocimiento que el motivo por el cual se expidieron los comprobantes fiscales en 2016 a pesar de que la transferencia fue el día 21 de octubre de 2015, se debió a un problema en nuestro software de facturación, que impidió tener un correcto y oportuno control de nuestros clientes y la facturación de los mismos.

¹⁰ Dicha respuesta tiene el carácter de documental privada en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 2 de Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, las cuales sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

*El problema fue resuelto y tan pronto se solucionó (sic) el asunto le entregamos la factura a nuestro cliente.
(...)”*

Ahora bien, en aras de maximizar el principio de exhaustividad, esta autoridad realizó una búsqueda dentro del portal de internet del SAT para allegarse de información que permitiera tener conocimiento sobre si los proveedores involucrados en el presente procedimiento (Traca e Integra) se encuentran incluidos en el **listado definitivo** de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes.¹¹

De la consulta realizada se identificó que la persona moral Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V. fue incluida en el listado referido a partir del 9 de octubre de 2018¹², situación que prevalece hasta el momento en que se dictó la presente Resolución, tal como consta en autos.

Al respecto, es importante precisar lo establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (en adelante CFF), mismo que, para efectos prácticos, se transcribe a continuación:

“Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los

¹¹ Cabe hacer mención que la Razón y Constancia en la que quedó asentada dicha búsqueda, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

¹² Fecha de publicación del listado definitivo de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes en el Diario Oficial de la Federación.

contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.

Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la documentación e información respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada en estos términos se entenderá concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.

Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de la prórroga, la autoridad, en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario. Dentro de los primeros veinte días de este plazo, la autoridad podrá requerir documentación e información adicional al contribuyente, misma que deberá proporcionarse dentro del plazo de diez días posteriores al en que surta efectos la notificación del requerimiento por buzón tributario. En este caso, el referido plazo de cincuenta días se suspenderá a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento y se reanudará el día siguiente al en que venza el referido plazo de diez días. Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

Los efectos de la publicación de este listado **serán considerar**, con efectos generales, **que las operaciones** contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión **no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.**

La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, un listado de aquellos contribuyentes que logren desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos que obtuvieron resolución o sentencia firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, derivado de los medios de defensa presentados por el contribuyente.

Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de cincuenta días, quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados, que dio origen al procedimiento.

Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este Código.

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código.” [énfasis añadido]

De acuerdo con el párrafo quinto del artículo en cita, los efectos de la publicación del listado de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes serán generales y deberá considerarse que los comprobantes expedidos por el contribuyente incluido en él no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

Conviene recordar que el artículo 69-B fue añadido al CFF en el año 2014 con el objetivo de tipificar a las llamadas Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), el objetivo de esta inclusión es evitar fraudes mediante el tráfico de comprobantes fiscales¹³. Los principales fraudes fiscales que busca evitar el artículo en comento son relativos a la deducción para efectos de Impuesto Sobre la Renta y el correlativo Impuesto al Valor Agregado acreditable por parte de las empresas.

Si bien es cierto que el procedimiento establecido en el artículo 69-B del CFF es de carácter fiscal y dicha materia rebasa el ámbito de aplicación de la fiscalización electoral, la actualización del supuesto previsto en el multicitado artículo del CFF por parte de una empresa que celebró operaciones con un partido político genera incertidumbre respecto de la realización material de los servicios prestados y que

¹³ PRODECON, “Presunción de inexistencia de operaciones amparadas en CFDI’s. Artículo 69-B del CFF”, cuadernos institucionales, México, septiembre 2020

en su momento fueron reportados en los informes de ingresos y gastos presentados por el sujeto obligado.

Por lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio de Administración Tributaria confirmara, en apego al ámbito de competencia de esa autoridad, el estatus y validez de los comprobantes materia del presente procedimiento emitidos por la persona moral Integra y, por otro lado, que indicara cuáles eran los efectos jurídicos o el tratamiento que debe darse a los comprobantes fiscales emitidos por un contribuyente incluido en el listado al que hace referencia el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. De las respuestas remitidas¹⁴ por la autoridad tributaria se obtuvo la representación gráfica de los comprobantes en cuestión de cuyo resultado se lee de manera textual:

“

Folio Fiscal: (...)

*Estatus del comprobante: **Vigente***

(...) [énfasis añadido]

“(...)

Asimismo, me permito comentarle que esta autoridad procede conforme a las facultades conferidas de incluir a los contribuyentes en los listados de presuntos y/o definitivos, de conformidad a lo establecido en el artículo 69-B del CFF...

(...)”

Como se observa, aunque el estatus de los comprobantes fiscales sea “vigente” no pueden tenerse como válidos para efectos fiscales. Al respecto, es importante invocar el criterio orientador de la jurisprudencia 132/2016 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la finalidad del artículo 69-B del CFF, que a la letra dice:

“PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.

El precepto aludido prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido

¹⁴ Dichas respuestas constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes o cuando no se localice al contribuyente. Asimismo, establece que los terceros que hayan utilizado estos documentos para soportar una deducción o un acreditamiento, tendrán un plazo para demostrar ante la autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o para corregir su situación fiscal. Ahora bien, el efecto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación sólo consiste en permitir que se detecte a los contribuyentes que emitieron una documentación sin que hubiera existido la operación o actividad que las soporte, pero ello no significa que se le quite validez a un comprobante, más bien evidencia una realidad jurídica y es que las operaciones contenidas en esos comprobantes, que en su caso hubieran sido utilizados, no cuentan con aquel soporte, por lo que si bien pudieron expedirse con anterioridad a la entrada en vigor del precepto aludido, no por ese hecho gozaban de eficacia, pues para ello necesitaban cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. En esas condiciones, si el comprobante no se encuentra soportado, desde un principio, por una operación real, no puede considerarse que con el procedimiento en cuestión se modifique una situación previamente creada, cuando ésta ni siquiera existió, ya que a través de este procedimiento sólo se evidencia la inexistencia de la operación, por lo que es claro que el artículo 69-B indicado no contraviene el principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

De acuerdo con la jurisprudencia citada, la validez de un comprobante fiscal emitido por un contribuyente incluido en el listado definitivo de operaciones presuntamente inexistentes es una prueba más para evidenciar que dicho sujeto emitió comprobantes fiscales sin que éstos fueran soportados por una situación real. Además, debe especificarse que si la inclusión en dicho listado fue con posterioridad a la emisión de los comprobantes (como es en el caso que nos ocupa), ello no significa que hubiesen sido eficaces pues, la inclusión en el listado definitivo no puede “modificar” el estatus de una operación que, en realidad, nunca existió. Por el contrario, la inclusión en ese listado solo evidencia la inexistencia de las operaciones.

No obstante, nuevamente se consultó al SAT para que se pronunciara al respecto e informara a esta autoridad si los comprobantes sujetos a análisis dieron lugar a iniciar el procedimiento contemplado en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación o si las operaciones amparadas por ellos fueron acreditadas ante dicha autoridad por el contribuyente emisor o por el beneficiario, es decir, por el Partido

Revolucionario Institucional, en uso del derecho contemplado en el párrafo octavo del artículo de referencia, que prevé la posibilidad de acreditar ante la autoridad hacendaria que efectivamente se adquirieron los bienes o se recibieron los servicios amparados por los comprobantes fiscales respectivos, o bien, proceder a la corrección de su situación fiscal en un plazo de 30 días posteriores a la publicación del listado definitivo.

En su respuesta, el SAT remitió a esta autoridad copia simple de la resolución de fecha 17 de abril de 2018, recaída al procedimiento iniciado en contra de Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V., en términos del artículo 69-B del CFF, con motivo del ejercicio de sus atribuciones de revisión, en donde se resolvió:

*“(…)
PRIMERO: Que el contribuyente SERVICIOS Y APLICACIONES INTEGRA, S.A. DE C.V., no desvirtuó la inexistencia de las operaciones amparadas con los comprobantes emitidos a los contribuyentes que se señalaron en el oficio individual número 500-05-208-5863 de fecha 30 de enero de 2018.
(…)”*

En efecto, el SAT confirmó que las operaciones no fueron desvirtuadas por el emisor de los comprobantes fiscales, por lo cual se confirma su inexistencia.

No se omite mencionar que, respecto del plazo de 30 días que tiene el contribuyente beneficiario de los comprobantes fiscales para acreditar la existencia de las operaciones, se encuentran los criterios sustantivos emitidos por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (en lo subsecuente Prodecon) mismos que se transcriben a continuación:

“2/2016/CTN/CS-SASEN (Aprobado 2da. Sesión Ordinaria 26/02/2016)

OPERACIONES INEXISTENTES. NO PRECLUYE EL DERECHO DEL RECEPTOR DE LOS COMPROBANTES FISCALES PARA ACREDITAR LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS, UNA VEZ QUE HAN TRANSCURRIDO LOS 30 DÍAS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CFF. La carta invitación a través de la cual la autoridad fiscal exhorta al contribuyente a regularizar su situación fiscal, con el objeto de que elimine los efectos fiscales que en su momento dio a los comprobantes que le fueron expedidos por alguno de sus proveedores, cuyos datos fueron publicados en el listado definitivo a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), por no haber acreditado ante dicha autoridad que sí llevó a cabo las operaciones que se estimaron inexistentes con su proveedor; en opinión de esta Procuraduría, no constituye el medio idóneo para

desestimar las operaciones que el contribuyente receptor de los comprobantes afirma si llevó a cabo con el contribuyente publicado en el referido listado. Por tanto, esta Procuraduría considera que el que un contribuyente quede incluido en forma definitiva en el listado previsto en el tercer párrafo del artículo 69-B del CFF como emisor de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, no debe ocasionar el efecto automático de que al tercero le sean desconocidas sus operaciones y, por ende, la deducción de las cantidades amparadas por los comprobantes respectivos; pues constituye un derecho fundamental de cualquier gobernado, el que los actos de autoridad destinados a privarle de algún derecho sigan el debido proceso, que comprende ser llamado al procedimiento respectivo a través de una notificación personal y directa. En ese sentido, si la autoridad fiscal pretende desconocer ciertas operaciones, debe ejercer las facultades de comprobación en términos de lo previsto en el último párrafo del 69-B del CFF de manera directa con el tercero afectado, con el objeto de que éste ofrezca pruebas y alegue lo que a su derecho convenga para acreditar la existencia de las operaciones, garantizando con ello su derecho de audiencia. Razonar lo contrario, conduciría a una interpretación excesiva y desproporcionada de la norma legal, pues los terceros para no perder la oportunidad de acudir ante el llamado de la autoridad, tendrían que estar revisando permanentemente que dentro de los listados definitivos que - en términos del artículo 69-B- publique el Servicio de Administración Tributaria, no se incluya alguno de sus proveedores, no sólo respecto de sus operaciones realizadas dentro del ejercicio fiscal en curso, sino incluso de aquellas celebradas en ejercicios anteriores.”

“8/2018/CTN/CS-SASEN (Aprobado 3ra. Sesión Ordinaria 26/03/2018)

OPERACIONES INEXISTENTES. DEL ARTÍCULO 69-B DEL CFF, NO SE DESPRENDE QUE PREVEA LA PÉRDIDA DEL DERECHO DE LOS RECEPTORES DE LOS CFDI PARA DEMOSTRAR LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE AQUÉLLAS. Del análisis del texto, hipótesis y consecuencias jurídicas del referido precepto, así como del estudio sistemático del Código Fiscal de la Federación (CFF), se puede apreciar que existen tres momentos para que los contribuyentes que deducen operaciones simuladas (EDOS) al recibir comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) de los contribuyentes publicados en el listado definitivo del artículo 69-B (EFOS-Empresas que facturan operaciones simuladas), puedan desvirtuar la presunción de inexistencia de las operaciones que se amparan en los CFDI. El primer momento es el establecido, precisamente, en el quinto párrafo del artículo 69-B del CFF, que señala que los terceros que hayan dado cualquier efecto fiscal a dichos comprobantes, tendrán un plazo de treinta días siguientes a la publicación del listado definitivo para demostrar ante la autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o bien, que corrigieron su situación fiscal. Sin embargo, en opinión de Prodecon, el no

ejercer ese derecho dentro del plazo aludido no implica que precluya la posibilidad de hacerlo con posterioridad, toda vez que lo cierto es que el EDO no ha sido notificado personal y directamente dentro de un proceso que lo vincule a demostrar dicha materialidad, sin que obste la publicación del contribuyente emisor de los comprobantes en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, ya que dicha publicación no puede surtir efectos de notificación frente a los terceros que recibieron esos comprobantes. El segundo momento puede producirse cuando concluido el mencionado plazo de treinta días, alguna autoridad emite una carta invitación para que los contribuyentes aclaren su situación o bien se regularicen. En este supuesto pueden ejercer el derecho para acreditar dicha materialidad de las operaciones o autocorregirse; empero si no lo hacen, en opinión de esta Procuraduría, tampoco precluiría el derecho para demostrar con posterioridad la efectiva materialidad, ya que dichas cartas no representan un acto de afectación, tan es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que no resultan impugnables por no constituir, precisamente, un acto de autoridad. Finalmente, se estima que el tercer y definitivo momento para que el contribuyente pueda demostrar la materialidad de las operaciones declaradas inexistentes, es cuando la autoridad ejerce en su contra alguno de los procedimientos de fiscalización previstos en las fracciones II, III y IX del artículo 42 del CFF; consecuentemente, en opinión de Prodecon, la última oportunidad que tienen las personas físicas o morales para acreditar la referida materialidad se actualiza hasta que se les instaura el procedimiento de revisión fiscal respectivo.”

Como puede observarse, de acuerdo a los criterios sostenidos por la Prodecon, el tercero beneficiario de los comprobantes emitidos por el contribuyente incluido en el listado referido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, cuenta con tres momentos para acreditar la existencia de las operaciones celebradas con aquél:

1. El primer momento es durante el plazo que otorga el propio artículo 69-B de 30 días posteriores a la publicación del listado definitivo.
2. El segundo momento es cuando la autoridad tributaria emite una carta-invitación para regularizar su situación fiscal o comprobar las operaciones celebradas. Sin embargo, esta invitación no puede considerarse como un proceso formal en donde el contribuyente pueda ejercer su garantía de audiencia para manifestar lo que a su derecho convenga.
3. Finalmente, el tercer momento es cuando la autoridad tributaria ejerza sus facultades indagatorias e inicie algún procedimiento de revisión fiscal.

En el caso que nos ocupa, esta autoridad electoral cuenta con la información necesaria que le permite afirmar que, al momento de la elaboración de la presente resolución, el partido político no realizó ninguna acción para acreditar las operaciones que se analizan o para modificar su situación fiscal.

En las relatadas condiciones, por lo que hace a las operaciones presuntamente realizadas con la persona moral “Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V.”, puede concluirse lo siguiente:

- El partido político reportó erogaciones correspondientes al servicio de consultoría y asesoría en materia de logística organizacional, soporte técnico y administración de información digital de diversos tipos y a nivel nacional por un monto de \$2,464,000.00 (dos millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.)
- Con la documentación adjunta al reporte de gasto, se identificó una discrepancia entre el año de pago y prestación de servicios, con la anualidad de la emisión del comprobante fiscal correspondiente.
- El sujeto obligado no presentó en el Sistema Integral de Fiscalización ni en respuesta a los requerimientos, evidencia alguna que acredite la materialidad de los servicios que afirma le fueron prestados.
- El proveedor de los servicios contratados, Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V., fue incluido en el listado definitivo de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes a partir de octubre de 2018 y hasta el momento de la emisión de la presente Resolución, sigue manteniendo el mismo estatus ante el Servicio de Administración Tributaria.
- De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, el Partido Revolucionario Institucional no ha desvirtuado la inexistencia de las operaciones ni ha modificado su situación fiscal al momento de elaboración de la presente resolución.

En virtud de las consideraciones vertidas en relación a ambos proveedores, de la valoración de todos y cada uno de los elementos de prueba que se obtuvieron durante la sustanciación del presente procedimiento, mismos que se concatenaron entre sí, esta autoridad electoral tiene certeza de lo siguiente:

- El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional registró erogaciones por la cantidad de \$5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) por concepto de servicios de asesoría contable, administrativa, financiera, logística, de soporte técnico y administración de información digital y física, en su informe anual de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio dos mil quince.
- El monto erogado fue depositado mediante transferencias bancarias el veintiuno de octubre de dos mil quince a cuentas de Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V. y Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V.
- Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V., expidió en favor del Partido Revolucionario Institucional, las facturas números A-518, A-519, A-520 y A-517, de fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, por un total de \$2,536,000.00.
- Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V., expidió en favor del Partido Revolucionario Institucional, las facturas números A-300, A-299 y A-298 de fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, por un total de \$2,464,000.00.
- Las citadas facturas se encuentran registradas en los controles del Servicio de Administración Tributaria con el estatus “vigente”.
- Fue imposible confirmar las operaciones con el proveedor Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V., debido a que en ninguno de los domicilios relacionados con la persona moral se encuentran sus instalaciones; esto es, se acreditó que el domicilio fiscal que la persona moral tiene registrado ante las autoridades competentes, corresponde a una casa habitación en la que desconocen la existencia de la empresa.
- El C. Antonio Primo Cruz, presunto representante legal de Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V., abrió una cuenta bancaria a nombre de Traca con una credencial para votar que no coincide en foto y firma con los datos contenidos en el Registro Federal de Electores, hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral. Adicionalmente, el ciudadano desconoció cualquier relación entre él y la empresa en estudio.
- El proveedor Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V. fue incluido por el Servicio de Administración Tributaria dentro del listado definitivo de

contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes a partir del mes de octubre del 2018, y hasta el momento no ha realizado acción alguna que haya cambiado dicho estatus. Por ende, dicha inclusión tiene efectos generales por lo que ninguna operación llevada a cabo por el Traca puede considerarse como existente.

- El sujeto obligado no presentó en el Sistema Integral de Fiscalización ni en respuesta a los requerimientos, evidencia alguna que acredite la materialidad de los servicios que afirma le fueron prestados.
- Dentro del desarrollo de la investigación se obtuvieron hallazgos que serán presentados en el **considerando 7**, toda vez que, si bien generaron alertas a esta autoridad fiscalizadora, se considera que éstos corresponden a una materia que rebasa la competencia de esta autoridad electoral y amerita un pronunciamiento por parte de la autoridad competente para ello, por las razones que se exponen en el mismo.

Por consiguiente, los elementos de prueba aquí presentados y concatenados entre sí, permiten acreditar fehacientemente que el Partido Revolucionario Institucional no reportó con veracidad la aplicación de recursos por un monto de \$5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.), durante el ejercicio anual 2015, pues se acreditó que la documentación presentada no corresponde con la realidad.

En consecuencia, en atención a los argumentos vertidos en el análisis del presente procedimiento, se concluye que la conducta realizada por el Partido Revolucionario Institucional es una falta de veracidad en el reporte de las operaciones realizadas con las empresas “Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V.” y “Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V.”.

Así, la conducta relatada vulnera la prohibición contenida en los artículos, 25, numeral 1, inciso a) y 78, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; así como el 127 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que se actualiza el no reporte con veracidad por concepto de servicios de asesoría contable, administrativa, financiera, logística, de soporte técnico y administración de información digital y física, por un monto de \$5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) correspondiente al ejercicio dos mil quince, por lo que lo procedente es declarar **fundado** el procedimiento de mérito.

6. Individualización de la sanción. Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de lo analizado en el estudio de fondo y la normatividad antes señaladas,

se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado *capacidad económica* de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con la irregularidad motivo del presente procedimiento, se identificó que el sujeto obligado registró gastos por concepto de de servicios de asesoría contable, administrativa, financiera, logística, de soporte técnico y administración de información digital y física, que, tras el proceso de confirmación hecho por la autoridad, se acreditó que su reporte no fue realizado verazmente, es decir, la falta

corresponde a la **omisión** de reportar con veracidad, lo cual derivó del proceso de sustanciación del presente procedimiento, atentando a lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a) en relación al 78, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; así como 127 del Reglamento de Fiscalización.

Modo: El instituto político omitió reportar verazmente operaciones celebradas con las personas morales “Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V.” y “Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V.”, por concepto de asesorías durante el ejercicio 2015 por un monto de \$5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M:N.).

Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el ejercicio 2015.

Lugar: La irregularidad se actualizó en la Ciudad de México.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

Del análisis de la conducta observada, es dable concluir que se cumple con los elementos que acreditan los elementos constitutivos del dolo directo, conforme al criterio sostenido por la SCJN¹⁵.

Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-125/2008 que, cualquiera que sea el concepto que se adopte de lo que debe entenderse por "dolo", todas coinciden en señalar que debe ser considerado como una conducta que lleva implícito el engaño, fraude, simulación o mentira; esto es, se trata de una conducta violatoria del deber jurídico y de actuar conforme a lo previsto en la ley. Es decir, de conformidad con dicha sentencia, se entiende al dolo como la intención de aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumple con las obligaciones de ley **tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral**.

Asimismo, en la sentencia que ha quedado precisada, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral estableció que, para estimar que un sujeto obligado actuó con dolo debe acreditarse que intencionalmente no reportó sus operaciones u ocultó información a fin de no incurrir en responsabilidad al momento de llevarse a cabo la revisión del informe, o que ello lo hubiera realizado con el ánimo de obstaculizar la función fiscalizadora de la autoridad.

¹⁵ Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVI/2005 de rubro "DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS".

En congruencia con lo expuesto, si por dolo se entiende la intención de aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral, entonces son esos actos (mediante los cuales se trata de engañar) los que de estar probados permiten afirmar que se procedió con dolo.

Lo anterior se robustece con lo sostenido por la Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-231/2009, en el que se sostiene que **el dolo debe estar acreditado ya sea con elementos de prueba suficientes o por conducto de indicios que concatenados con otros medios de convicción se pueda determinar su existencia.**

Asimismo, resulta aplicable al caso, lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con rubro **“DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”**, conforme a las cuales el dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual o cognoscitivo y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Así pues, se integran en el dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de rubro: **“DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL”**, donde se establece que el dolo no sólo puede ser comprobado con la prueba confesional, sino que la prueba indiciaria permite que a través de hechos conocidos que no constituyen acciones violatorias de la norma, se pueda llegar a la acreditación del dolo, concatenando hechos y utilizando los principios de la lógica y las máximas de la experiencia.

De lo anterior se puede advertir que los criterios asumidos por los órganos jurisdiccionales en materia penal, así como los establecidos por la doctrina para definir el dolo, a la luz de la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con rubro **“DERECHO ADMINISTRATIVO**

SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL¹⁶, le son aplicables *mutatis mutandis*¹⁷, al derecho administrativo sancionador.

Expuesto lo anterior, es necesario determinar si en el presente caso existió una conducta dolosa por parte del sujeto infractor.

En este orden de ideas, es dable concluir que se cumple con el elemento intelectual o cognitivo, toda vez que se parte del hecho cierto de que el instituto político conocía previamente las disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto, es decir, conocía los supuestos, términos y condiciones a los que debe sujetar su conducta, en consecuencia, tenía conocimiento de su obligación de rendir cuentas de conformidad con lo establecido en la normatividad y que, ante su incumplimiento, necesariamente se produciría una consecuencia de derecho, es decir, que su actuar conllevaría la aplicación de una sanción.

Esto es así, pues los sujetos obligados tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora electoral, el destino y aplicación de sus recursos de conformidad con la normatividad electoral en materia de fiscalización y al ser una obligación de todos los entes políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales, resulta inconcuso que el infractor no podrá argumentar un desconocimiento de la normatividad de la materia, por lo que existe constancia de un conocimiento previo de la misma, así como de las consecuencias jurídicas que, ante su incumplimiento, necesariamente se producirán, con lo cual se hace evidente el elemento cognoscitivo.

Una vez acreditado el elemento cognitivo, en el presente caso se actualiza el elemento volitivo necesario para tener por acreditado el dolo directo, ello es así pues al conocer previamente la obligación de acreditar verazmente la aplicación de los gastos realizados, resulta indubitable que el sujeto obligado reportó ante esta

¹⁶ Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala Superior, tesis XLV/2002

¹⁷ En la referida tesis se estableció que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del *ius puniendi* estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. El poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del *ius puniendi*. Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas.

autoridad gastos por concepto de asesorías mismos que no fueron realizados y por el cual se emitieron diversas facturas.

Visto lo anterior, y del cúmulo probatorio que obra en el expediente, se puede arribar a la conclusión cierta que esas operaciones nunca se realizaron, es decir, no se materializaron; es decir, al concatenar la documentación con que cuenta esta autoridad, se comprueba que las evidencias presentadas a la autoridad electoral por el ente político incoado no es veraz en cuanto a alcance y contenido; consecuentemente, se tiene por acreditado el dolo en el actuar del sujeto obligado.

En la especie, en apego a lo sostenido por la SCJN¹⁸, al constituir el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera directa, en el presente caso su acreditación se hará a través de la prueba circunstancial, para lo cual se cuenta con el indicio de que: i) Presentó a la autoridad diversa documentación con información no veraz; ii) la intención del sujeto fue engañar a la autoridad, en tanto entregó la documentación con información no veraz; es decir, que el sujeto obligado fijó su voluntad en incumplir la ley, este indicio se encuentra constituido por el hecho cierto y probado de que, previamente a su actuar, conocía la obligación a que se encontraba sujeto, es decir, la base del indicio es la certeza de que el ente político actuó a sabiendas de que infringía la ley, tal como se ha demostrado.

En este tenor, resulta incuestionable que el sujeto incoado desplegó una conducta dolosa al omitir reportar con veracidad, a sabiendas que la misma era ilegal, con la intención de aparentar una situación que no es real¹⁹, tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumplen con las obligaciones de ley, alentado por el beneficio que le produce tal conducta, lo que implica la aceptación de sus consecuencias y ello posibilita a esta autoridad electoral su sanción.

d) La trascendencia de la normatividad transgredida.

Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta

¹⁸ Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVII/2005 de rubro "DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL".

¹⁹ Conforme a lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-125/2008.

sustancial por la omisión de reportar con veracidad ante la autoridad fiscalizadora los gastos realizados a lo largo del ejercicio dos mil quince, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los valores antes establecidos y con ello, afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. Esto es, al omitir reportar con veracidad los egresos, se actualiza la falta sustancial.

En este orden de ideas se desprende que, el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, incisos a)²⁰, en relación con el 78, numeral 1, inciso b)²¹, ambos de la Ley General de Partidos Políticos; así como el artículo 127²² del Reglamento de Fiscalización.

De los artículos señalados se desprende que los institutos políticos tienen la obligación de conducirse bajo las disposiciones normativas de la materia, siendo garantes en todo momento del cumplimiento de los principios que rigen el Estado democrático. En este sentido, tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes del ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y destino de los recursos que se hayan utilizado, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

²⁰ **Artículo 25.- 1.** Son obligaciones de los partidos políticos: **a)** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. (...)"

²¹ **Artículo 78.- 1.** Los partidos políticos deberán presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las directrices siguientes: (...) **b)** Informes anuales: **I** Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte; **II.** En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe; **III.** Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda, y **IV.** Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto.; (...)"

²² **Artículo 127.- 1.** Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. **2.** Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. (...)"

La finalidad de dichos preceptos normativos es tutelar los principios de certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas utilizados en el ejercicio ordinario, al establecer con toda claridad que los partidos políticos tienen las siguientes obligaciones: registrar contablemente sus egresos, soportar todos los ingresos y egresos con la documentación que expida el sujeto obligado o que sea expedida a nombre de él, con la información de la contraparte respectiva, y entregar la documentación veraz antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables, entre otras.

Del análisis previo, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza, legalidad y la transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto desarrollo de su contabilidad, traduciéndose en una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

En este orden de ideas, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al reportar sin veracidad e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre el destino

de los recursos en el ejercicio de rendición de cuentas, se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza, la legalidad y la transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido político en cuestión viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el instituto político vulnera la hipótesis normativa prevista en los artículos 25, numeral 1, inciso a) en relación con el 78, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; así como 127 del Reglamento de Fiscalización.

En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos de los partidos políticos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza, la legalidad y transparencia en la

rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, vulnera los bienes jurídicos tutelados que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a) en relación con el 78, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; así como 127 del Reglamento de Fiscalización.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta cometida.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ESPECIAL**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en

consideración las agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.²³

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando denominado 3. capacidad económica** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ESPECIAL**, en razón de que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de los hechos objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) **CALIFICACIÓN DE LA FALTA**, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio 2015.

²³ Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado asciende a **\$5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²⁴

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada **fracción III** consistente en una **reducción de la ministración mensual del financiamiento público** que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

²⁴ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica, y equivale al **200% (doscientos por ciento)** sobre el monto involucrado, a saber **\$5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.)**. Lo anterior, da como resultado una cantidad total de **\$10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenerimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.)**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

7. Vistas derivadas de los hallazgos obtenidos en el ejercicio de la facultad de investigación de la autoridad electoral.

Una vez que han sido estudiados los documentos y actuaciones que integran el presente procedimiento de mérito, en los que se ha advertido que el Partido Revolucionario Institucional no reportó con veracidad recursos por concepto de servicios de asesoría contable, administrativa, financiera, logística, de soporte técnico y administración de información digital y física, es importante de igual manera detallar aquellos elementos y hallazgos que levantaron alertas en esta autoridad.

Al dar inicio al procedimiento incoado en contra del sujeto denunciado, se le otorga garantía de audiencia para que éste aporte los elementos de prueba mínimos, para establecer un indicio de la inexistencia o para desvirtuar los hechos que le son imputados, pero ello no implica que la investigación a la que está obligada la autoridad administrativa se acote a las pruebas aportadas por él o con la realización de diligencias mínimas, en virtud de que los hechos y pruebas aportados en la respuesta del incoado, por lo que le constriñe a ésta realizar todas la diligencias pertinentes, para allegarse de los elementos necesarios que le permitan estar en condiciones de determinar la existencia y veracidad de los hechos violatorios de la

normativa electoral y, en su caso, determinar la responsabilidad o responsabilidades que correspondan, garantizando con ello el cumplimiento de los principios rectores de la materia.

Señalado lo anterior resulta pertinente establecer que derivado de esa facultad de investigación y haciendo uso de los convenios de colaboración que el INE tiene celebrados con unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autoridad fiscalizadora realizó una investigación en la que obtuvo información respecto de las operaciones celebradas por las personas morales en comento, la cual pudiera actualizar conductas violatorias de la normatividad que deben ser conocidas por la autoridad competente, toda vez que se detectaron inconsistencias en la logística de la materialidad de los servicios contratados y del flujo de efectivo de las operaciones.

Al respecto, es dable señalar que la autoridad fiscalizadora una vez analizados los hallazgos obtenidos pudo establecer:

➤ **Soporte documental**

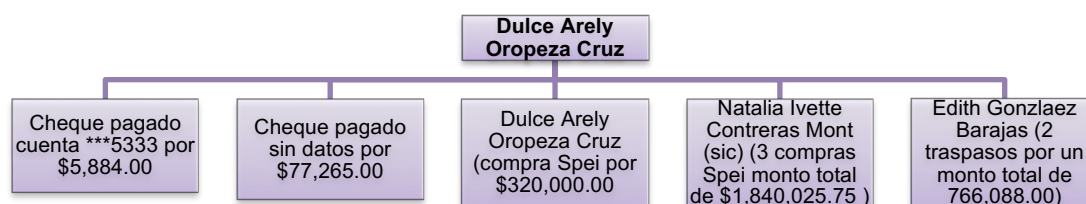
- En los contratos no se detallan las actividades a realizar, las fechas para su ejecución, el lugar donde sería prestado el servicio ni cuáles serían los entregables o evidencias que acreditaran el cumplimiento.
- No estableció el perfil de las personas que prestarían el servicio, ni la documentación que acreditara que tenían la capacidad técnica para prestarlo.
- La cláusula de penalización señala que se sancionará al proveedor por el retraso en el servicio, pero los contratos no contienen las fechas de ejecución.

➤ **Flujo operacional de transacciones²⁵**

El partido contrató con “Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V.” y “Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V.”, a quien en conjunto pago el monto de \$5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) por concepto de servicios de asesoría contable, administrativa, financiera, logística, de soporte técnico y administración de información digital y física, en el marco de la revisión del Informe Anual 2015.

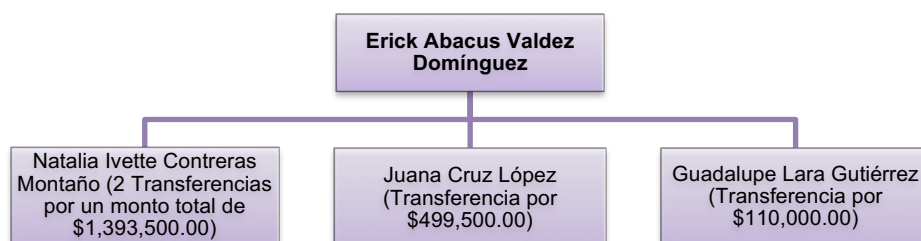
²⁵ Los elementos e información de referencia corresponden a la respuesta remitida por la Dirección de Riesgo, mismos que constituyen una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

De la cantidad referida, \$2,464,000 (dos millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) fueron pagados a Integra, y estos a su vez transferidos a la C. Dulce Arely Oropeza Cruz, quien el mismo día los dispersó de la siguiente manera:



De la información obtenida durante las investigaciones, se pudo corroborar que la C. Dulce Arely Oropeza Cruz, no presentó declaración anual del impuesto sobre la renta; sin embargo, emitió CFDI a 13 empresas sin que existieran elementos de convicción que demostraran cómo fue capaz de prestar el servicio.

Por otro lado, Traca, recibió del partido incoado la cantidad de \$2,519,823, (dos millones quinientos diecinueve mil, ochocientos veintitrés pesos 00/100 M.N) y a su vez estos recursos fueron transferidos a una cuenta de la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A., la cual se encuentra a nombre del C. Erick Abacus Valdez Domínguez, quien el mismo día realizó la dispersión de \$2,503,000.00 (dos millones quinientos tres mil pesos 00/100 M.N) a las siguientes personas:



De la información obtenida durante las investigaciones, se pudo corroborar que la C. Dulce Arely Oropeza Cruz, no presentó declaración anual del impuesto sobre la renta; sin embargo, emitió CFDI a 13 empresas sin que existieran elementos de convicción que demostraran cómo fue capaz de prestar el servicio.

De la información obtenida durante las investigaciones, se corroboró que, el C. Erick Abacus Valdez Domínguez emitió a Traca, CFDI por un importe de \$9,452,891.26, es preciso recordar que, presentó declaración anual del impuesto sobre la renta, donde los ingresos y las deducciones declarados son casi por la misma cantidad;

no existen comprobantes para soportar sus deducciones ni demostrar cómo fue capaz de prestar servicios por los montos facturados. Asimismo, el C. Erick Abacus Valdez Domínguez cuentan con un perfil educativo que no demuestra los conocimientos técnicos suficientes para prestar servicios de asesoría especializada.

Ahora bien, no es óbice resaltar que, de la investigación y cruce de información realizada, se pudo verificar que la C. Natalia Ivette Contreras Montaña recibió recursos tanto de la C. Dulce Arely Oropeza Cruz, como del C. Erick Abacus Valdez Domínguez, por un monto total acumulado de \$3,233,525.75, (tres millones doscientos treinta y tres mil quinientos veinticinco pesos 75/100 M.N), lo que podría generar una presunción de que existe una relación entre ambas empresas.

De la información obtenida durante las investigaciones, se corroboró que, la C. Natalia Ivette Contreras Montaña, retira los \$3,233,525.75, (tres millones doscientos treinta y tres mil quinientos veinticinco pesos 75/100 M.N) a través de cheques emitidos a diversas personas físicas que a su vez los cobraron en efectivo. No presenta declaraciones anuales y cuentan con un perfil educativo que no demuestra los conocimientos técnicos suficientes para prestar servicios de asesoría especializada.

En ese sentido, del estudio del flujo de recursos entregados por el partido a las personas morales, se establece que éstas dispersaron el dinero que recibieron como pago, a diversas personas físicas .

Las operaciones económicas efectuadas por las empresas motivo de investigación no reflejan la logística que contenga la materialidad de la prestación de los servicios de asesoría, ya que, las personas involucradas cuentan con un perfil educativo que no demuestra los conocimientos técnicos suficientes, lo que indica de forma indiciaria a esta autoridad que podría actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación que en su párrafo primero señala que se presume la inexistencia de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales cuando se detecta que un contribuyente que no tiene activos, personal e infraestructura y emite comprobantes fiscales, situación que, en el caso que nos ocupa cobra vigencia, de acuerdo a los resultados obtenidos durante la investigación realizada.

Derivado de lo anterior, y como ha sido señalado en el presente apartado, en el ejercicio de la facultad de investigación de la autoridad administrativa electoral, no basta que ésta se limite a resolver únicamente con los elementos probatorios que ofrezca el o los sujetos denunciados, sino que, ante la sola presencia de indicios

que evidencien la posible existencia de una falta o infracción legal, a los ordenamientos legales conlleva en ejercicio de sus atribuciones dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

En ese orden de ideas, cabe señalar que para presumir la simulación o inexistencia de operaciones (en materia fiscal), es imperante que la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, **que dichos contribuyentes se encuentren no localizados**, por lo que la autoridad tendría que motivar por qué considera que el contribuyente se encuentra en alguna de estas situaciones, ya que sólo así podría generarse a su favor la presunción establecida en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación mismos que establece lo siguiente:

*“**Artículo 69-B.** Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, **que dichos contribuyentes se encuentren no localizados**, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.
...”*

En vista de lo anterior, la autoridad tendrá entonces que establecer los motivos o razones del porqué considera que los activos, personal e infraestructura manifestados por los contribuyentes no son suficientes para llevar a cabo las actividades amparadas en los comprobantes fiscales.

Consecuentemente, la presunción de operaciones simuladas o inexistentes es una facultad correspondiente a la autoridad fiscal, no obstante, ello no implica que con base a las pruebas aportadas por los sujetos implicados, así como las pruebas recabadas por esta autoridad, esta pueda pronunciarse al respecto, lo cual debe ser de conformidad a las facultades y límites que la misma ley lo disponga.

En ese sentido, esta autoridad electoral ha llegado a las siguientes determinaciones respecto de las operaciones que realizó el sujeto incoado con los proveedores Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V. y Servicios y Aplicaciones Integra, S.A. de C.V.

En un primer término, por lo que corresponde a la empresa **Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V.**, como bien se ha analizado en el fondo de este asunto y de la documentación soporte que presentó el partido en el marco de la revisión de los Informes Anuales 2015 respecto de dichas erogaciones, se desprendió la existencia de cuatro contratos firmados con la empresa “Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V.” (en lo subsecuente Traca) por un monto total de \$2,536,000.00 (dos millones quinientos treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.).

Ahora bien, de las diligencias que realizó esta autoridad se llegó a la conclusión que las erogaciones realizadas por el partido político fueron depositadas en cuentas de esa persona moral; sin embargo, después de haber realizado un cumulo de diligencias con el fin de localizar y requerir información a esa empresa así como a su representante y socios fue materialmente imposible y por el contrario, se tiene acreditado que el domicilio en donde presuntamente se ubican sus instalaciones, corresponde a una casa habitación cuyos habitantes desconocen la existencia de empresa alguna.

Ante tales circunstancias esta autoridad sustanciadora en el ámbito de sus atribuciones accedió al portal oficio del SAT a efecto de verificar si la empresa en cuestión se encontraba en el listado de contribuyentes catalogados de acuerdo al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, es decir, en el listado de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes. De dicha verificación se obtuvo que la empresa no se encontraba considerada en dicho supuesto.

Aunado a lo antes expuesto, de igual forma se tuvo por acreditado, toda vez que así lo informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que el C. Antonio Primo Cruz fungió como representante legal de la empresa Traca, en virtud de que constaba en el contrato de apertura de la cuenta con terminación *****2812 en la institución bancaria IXE, toda vez que constaba la firma de esa persona; sin embargo, al momento de requerirlo comentó que no había tenido relación alguna con la persona moral Traca y/o así como con el sujeto obligado.

Asimismo, esta autoridad pudo constatar de la documentación que obra en autos respecto al expediente de apertura de cuenta bancaria, que la copia de la credencial de elector exhibida como identificación oficial ante la institución de banca contiene datos que no coinciden plenamente con los registrados en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores a nombre del C. Antonio Primo Cruz, siendo las diferencias entre uno y otro la fotografía y firma del ciudadano, por lo que ante tales circunstancias la Unidad Técnica de Fiscalización al advertir la probable violación a disposiciones legales que no son materia de fiscalización procedió a dar

vista la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electores (ahora FEDE) para que determinaran lo que en derecho correspondiera.

Una vez expuesto lo anterior, y al haberse acreditado la imposibilidad de localización de la empresa así como de sus socios y representantes, se está dentro de los supuesto que contempla el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que esta autoridad electoral considera que ha lugar a **dar vista al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público**, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo conducente en relación a la empresa Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V.

Ahora bien, por lo que respecta a la empresa **Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V.**, a pesar de que esta autoridad investigadora realizó la localización del representante legal de esa persona moral y se confirmó la realización de las operaciones bancarias hechas con el partido político, consta en autos que se realizó la verificación dentro del portal de internet del SAT que dicha empresa fue incluida en el **listado definitivo** de contribuyentes con operaciones **presuntamente inexistentes** a partir del 9 de octubre de 2018 y hasta el momento en que se dictó la Resolución de mérito dicha empresa sigue conservando el mismo estatus .

En razón de lo antes expuesto, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio de Administración Tributaria con el objetivo de que informara a esta autoridad si los comprobantes sujetos a análisis dieron lugar a iniciar el procedimiento contemplado en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Al respecto, esa autoridad hacendaria remitió copia simple de la resolución de fecha 17 de abril de 2018 recaída al procedimiento iniciado en contra de Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V. en términos del artículo 69-B del CFF con motivo del ejercicio de sus atribuciones de revisión, misma en la que se resolvió que esa empresa no desvirtuó la inexistencia de las operaciones amparadas con los comprobantes emitidos a los contribuyentes que se señalaron en el oficio individual número 500-05-208-5863 de fecha 30 de enero de 2018.

Por lo que, en efecto, el SAT confirmó que las operaciones no fueron desvirtuadas por el emisor de los comprobantes fiscales, por lo cual se confirma la inexistencia de las mismas.

Es decir, que por lo que hace a la situación fiscal de la empresa **Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V.**, ya la autoridad hacendaria ha procedido dentro

del ámbito de sus atribuciones en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, declarando la inexistencia de las operaciones de esa persona moral.

Con base en lo antes señalado, es que esta autoridad de igual forma prevé la falta de observación al artículo **45 del Reglamento de Fiscalización** mismo que dispone lo siguiente:

“Todos los comprobantes de las operaciones a que se refiere el Reglamento deben atender a lo dispuesto en la NIF A-4 ‘características cualitativas de los estados financieros’, particularmente lo relativo a la veracidad, objetividad y verificabilidad “

Es decir, el objetivo de una Norma de Información Financiera A-4 es establecer las características cualitativas que debe reunir la información financiera contenida en los estados financieros.

Toda vez, que de acuerdo con la serie “A” de las normas de información financiera, las operaciones registradas contablemente por cualquier entidad que emita información financiera (en el caso que nos ocupa, el partido político y la empresa Integra) deben contar con determinadas características cualitativas, entre ellas, deben ser **objetivos, veraces y verificables**, sin embargo debido a la actual situación fiscal de esa empresa sus operaciones no pueden cumplir con esas características exigidas dentro de ese término legal al haberse declarado inexistentes.

Ahora bien, en el caso del art. 69-B del Código Fiscal de la Federación, nos lleva a que la carga de la prueba de que efectivamente se cuenta con activos, personal, infraestructura o capacidad para prestar servicios o producir y comercializar bienes cae en el contribuyente que emitió los comprobantes fiscales de las operaciones presuntamente inexistentes (conocido como “EFO”), sin embargo, si el contribuyente emisor del comprobante no desvirtúa la presunción de inexistencia de sus operaciones, la autoridad fiscal, según el citado artículo: “...publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria...”, y continúa señalando: “...Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno...”

Ante este escenario, la carga de la prueba de que efectivamente se prestaron los servicios o se adquirieron los bienes caería en el contribuyente **que pagó el bien o**

la prestación del servicio presuntamente inexistente (conocido como “EDO”), como lo señala el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Civiles: “La parte que impugne una presunción debe probar contra su contenido.”

[énfasis añadido]

Esto significa que, si el contribuyente quiere evitar la consecuencia de tener operaciones que no puede deducir o acreditar fiscalmente, tiene dos alternativas que le da el mismo artículo. 69-B: *“...Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan...”*

Bajo esa óptica, la autoridad hacendaria contempla 5 fuentes principales de información con las cuales debe contar cualquier empresa y por ende serviría a quien adquirió sus servicios para demostrar la materialidad de las operaciones

- 1) **Información pública.** Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. (Escrituras públicas, licencias, patentes, concesiones públicas, inscripciones ante el SAT, IMSS, otras instituciones públicas, declaraciones, avisos, entre otros)
- 2) **Información generada internamente.** Son los documentos generados por controles internos de las empresas como manuales de políticas y procedimientos, órdenes de compra, pedidos, cotizaciones.
- 3) **La contabilidad.** La misma contabilidad tiene valor probatorio, ya que los registros contables se integran con la documentación que los comprueban y que de acuerdo con las Normas de Información Financiera A-1, A-2, A-3 y A-4 establecen los principios de sustancia económica, de confiabilidad, veracidad y verificabilidad de las operaciones y toda vez que es obligación de las empresas llevarla de conformidad con los artículos 16 y 33 del Código de Comercio, y la misma legislación fiscal. (Libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, documentación relacionada con la contratación de personal subordinado, así como su inscripción y registro o avisos en materia de seguridad social).

- 4) **Proveedores.** Demostrar la existencia de operaciones con los proveedores, la cual debe consistir en recabar la información relevante a cada operación, es decir, se puede relacionar cada CFDI emitido por el proveedor señalado en el listado, haciendo una descripción detallada de la operación llevada a cabo y amparada en dicho comprobante, explicando la cronología de la operación, incluyendo fechas descripciones de hechos, por supuesto se debe realizar un ofrecimiento de pruebas en una relación numerada y precisando qué tipo de documento soporte se ofrece, como pueden ser originales, copias, impresiones de correos, comunicados, etc.
- 5) **Datos e Información.** Este consiste en la recopilación de datos e información, los cuales pueden ser: en el caso de adquisición de bienes intangibles, explicar las razones por las cuales se determinó la necesidad de adquirirlo, en el caso de servicios profesionales o técnicos se tiene que explicar en qué parte del servicio que se dio al contribuyente, se requiere el servicio profesional de un especialista, en el caso de bienes obtenidos es importante tener evidencia que demuestre cuando y como se obtiene el bien o la prestación del servicio y más cuando sea un intangible específicamente cuando el resultado final sea un informe, o un dictamen el cual debe de quedar documentado

Por lo que, en atención a lo antes expuesto, así como la falta de acreditación por parte del sujeto obligado al no presentar en el Sistema Integral de Fiscalización ni en respuesta a los requerimientos, evidencia alguna que acredite la materialidad de los servicios que afirma le fueron prestados, es que se acredita la violación a la normatividad electoral incumplió lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.

Con base en lo analizado, puede concluirse lo siguiente:

- La autoridad fiscal es aquella competente para hacer la declaración, en relación a la presunción y determinación de operaciones inexistentes se encuentra establecida en el Código Fiscal de la Federación (artículo 69-B).
- El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación establece que, los contribuyentes vendedores de factura apócrifas, como los adquirentes, si no justifican su proceder, serán publicados en el Diario Oficial de la Federación, y todas sus operaciones mercantiles, serán declaradas inexistentes para los primeros y para los segundos, serán consideradas simuladas, sin ningún efecto jurídico.

- Si bien es cierto esta autoridad electoral carece de competencia para resolver el fondo del procedimiento contemplado en el Código Fiscal de la Federación, ello no implica que autoridades diversas a la fiscal se abstengan de realizar en el uso de sus atribuciones, una investigación relacionada con la veracidad de las operaciones.
- Por lo que hace a la empresa Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V., se procede a dar vista al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo conducente en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
- En relación al proveedor Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V, la autoridad hacendaria declaro la inexistencia de sus operaciones al seguirse el procedimiento respectivo en términos del artículo 69-B del CFF.

Ahora bien, y de conformidad con el criterio sostenido en el SUP-RAP-24/2018²⁶, este procedimiento se agotó en forma completa y exhaustiva en cuanto al destino real de los recursos erogados, en virtud de la actividad dolosa del partido político de reportar con falsedad, ya que impidió u obstaculizó que la autoridad tuviera certeza respecto de ese destino real, por lo que la investigación y determinación de la presunta responsabilidad de las empresas involucradas y la corresponsabilidad del partido político por el destino real de los recursos, deberá ser determinada por las autoridades competentes.

En ese sentido ante los hallazgos realizados durante la sustanciación del procedimiento y que serán sustentados en el cuerpo de la presente resolución, esta autoridad considera procedente que se de vista a las siguientes autoridades:

²⁶ Criterio en el cual la Sala Superior señaló que el esclarecimiento relativo a la existencia o inexistencia de la empresa; sus actividades legales o ilegales; su válida o inválida constitución; su debido registro ante las autoridades competentes, si sus ingresos son acordes con sus actividades; y si los recursos fueron recibidos realmente por la empresa o terceros (personas físicas o morales), escapa a las facultades del Instituto Nacional Electoral, en tanto que, su función fiscalizadora, en el caso, se circunscribió a verificar la veracidad o falsedad del reporte y si el dinero fue destinado a un fin partidista.

- Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para que en ámbito de su competencia y atribuciones de acuerdo a los hallazgos realizados por la autoridad electoral, realice los actos que considere necesarios y pertinentes para determinar si existe o no violación a la normativa penal-electoral por parte de las personas morales Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V y Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V., así como las personas físicas ya señaladas y que de manera directa o indirecta fueron beneficiadas con los recursos erogados por el Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con la Cláusula TERCERA inciso a), k) y m) del Convenio de Colaboración en Materia de Prevención y Atención de Delitos Electorales y Fomento a la Participación Ciudadana celebrado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el INE.
- Al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SAT), para que también en el ámbito de su competencia, facultades y atribuciones, determine lo que en derecho proceda, de acuerdo a las constancias que obran el cuerpo de la presente resolución, respecto a las operaciones realizadas por las personas morales Servicios y Asesorías Traca, S.A. de C.V y Servicios y Aplicaciones Integra, S. A. de C.V, así como de las personas físicas señaladas. Lo anterior con fundamento en el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que en el ámbito de sus atribuciones determine si las conductas acreditadas pudieran configurar delitos dentro de su esfera de competencia, de conformidad con lo ya expuesto y los artículos 221 y 223 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y la Cláusula Primera del Convenio de Colaboración celebrado por el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera.

8. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó

la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo electrónico.

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de notificación la realizada “vía electrónica”.

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.

En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su instituto político.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional en los términos del **Considerando 5** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el **Considerando 6** de la presente Resolución, se impone al Partido Revolucionario Institucional, una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.)**.

TERCERO. En términos de lo expuesto en el **Considerando 7** de la presente Resolución, dese vista a las autoridades siguientes:

- La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones, determine lo que en derecho corresponda y remítanse la totalidad de las constancias que integran el procedimiento de mérito.
- El Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SAT) a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho corresponda y remítanse la totalidad de las constancias que integran el procedimiento de mérito.
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho corresponda y remítanse la totalidad de las constancias que integran el procedimiento de mérito.

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al Partido Revolucionario Institucional, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos del **considerando 8**.

QUINTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley general de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en esta Resolución, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables.

SEXTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, según sea el caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/11/2017

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 25 de febrero de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al porcentaje de reducción de financiamiento público, consecuencia de la sanción, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**